



AMPARO EN REVISIÓN 914/2002.

**QUEJOSA: CAJA INDEPENDENCIA,
S. C. L., SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CONSUMO DE AHORRO Y PRÉSTAMO, DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE.**

**MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS
SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
veintiuno de mayo de dos mil tres.



VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo en
revisión anotado al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el trece de julio de dos
mil uno, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de
Distrito en el Estado de Querétaro, Isaac Alejo Valencia, en su
carácter de apoderado legal de Caja Independencia, S. C. L.,
sociedad cooperativa de consumo de ahorro y préstamo, de
responsabilidad limitada de capital variable, promovió juicio de

amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: - - - El

"Honorable Congreso de la Unión de los Estados

"Unidos Mexicanos; el señor Presidente

"Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

"el señor secretario de Gobernación del Ejecutivo

"Federal; el señor Director del Diario Oficial de la

"Federación. - - - IV.- ACTO RECLAMADO: (sic). - - -

"A).- Del Congreso de la Unión reclamo: la

"aprobación y expedición del Decreto que contiene

"la Ley de Ahorro y Crédito Popular y Derogación

"de diversas disposiciones de la Ley General de

"Organizaciones y Actividades Auxiliares del

"Crédito y de la Ley General de Sociedades

"Cooperativas. - - - B).- Del Presidente de la

"República reclamo: la promulgación y la orden de

"publicación de la ley citada. - - - C).- Del Secretario

"de Gobernación del Ejecutivo Federal reclamo: el

"refrendo y firma de la ley citada. - - - D).- Del

"Director del Diario Oficial de la Federación

"reclamo: la publicación del decreto respectivo".

(Foja 2 cuaderno relativo al juicio de amparo).

El promovente, señaló como garantías individuales violadas las consentidas en los artículos 1º, 5º, 14, 16 séptimo párrafo, 25 y 26 constitucionales, señaló los antecedentes que estimó



pertinente y expuso los conceptos de violación que a continuación se transcriben:

**"1.- La ley que mediante este juicio de garantías se
"combate dice en su artículo 3°. - - - (Se
"transcribe). - - - De lo anteriormente transcrito de
"la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se concluye
"que ésta, pretende abarcar a las instituciones
"como la que represento, las cuales se encuentran
"regidas por la Ley General de Sociedades
"Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la
"Federación el día 3 de agosto de 1994 y,
"constituida con las características que señalan los
"artículos 21 fracción I, 22 y 26 del cuerpo de leyes
"antes citado, y que, dada la actividad que en
"nuestro 'objeto social' se describe, es evidente
"que por su sola expedición, esta ley nos causa un
"verdadero y grave daño en nuestra esfera jurídica,
"violando en nuestro perjuicio las garantías
"constitucionales consignadas en los artículos
"antes mencionados, por ser inconstitucional dicha
"ley, ya que carece de facultades el poder
"legislativo para intentar legislar a nuestra
"institución interpretando el sentido de la ley de la
"manera que lo hace, así como por tratar de aplicar
"disposiciones contrarias a derecho dada la
"naturaleza de nuestros organismos cooperativos,
"por las siguientes razones: - - - De la lectura de la
"Ley de Ahorro y Crédito Popular se desprende que**

MEXICANOS
TE D
ACION
RDOS
SALA

**"a nuestra institución se le consideró que realiza
"actividades de naturaleza financiera, en
"consecuencia, el legislador pretende
"(erróneamente) fundamentarse en lo que establece
"la fracción X del artículo 73 de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
"faculta al Congreso para legislar en este tipo de
"actividades; concretamente en lo que señala la
"fracción de dicho artículo que al efecto
"transcribo: - - - (Se transcribe). - - - Cabe señalar
"en relación con este particular, que el Estado
"Mexicano dentro de la declaración de principios
"generales y abstractos que se enmarcan en la
"Constitución Política, en tratándose de la materia
"económica, establece la responsabilidad de la
"rectoría económica del Estado, pero, desde luego
"el orden de importancia en que se desarrolla dicha
"ingerencia estatal, va en relación directa con el
"grado de complejidad de la estructura en cuestión;
"y aunque no existe una reglamentación específica
"sobre dichas actividades, la legislación financiera
"mexicana en orden de importancia y complejidad
"las resume de la siguiente manera: - - - a).-
"OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS: serán
"las operaciones activas y pasivas de la banca,
"recepción de dinero y otorgamiento de crédito y
"los servicios que ésta presta; - - - b).-
"OPERACIONES BURSÁTILES: operaciones sobre
"valores en el mercado de valores, de correduría,**



"administración y de asesoría en materia
 "financiera; - - - c).- OPERACIONES DE RIESGO: las
 "que podemos dividir en las operaciones de seguro
 "y de fianza, las cuales tienden a prevenir el
 "resultado de algún siniestro o bien garantizar el
 "cumplimiento de una obligación; - - - d).-
 "OPERACIONES NO BANCARIAS. Se han
 "denominado como tales, para poder distinguirlas
 "de las bancarias, sin llamarlas auxiliares del
 "crédito ya que no son propiamente auxiliares, sino
 "son operaciones que celebran intermediarios
 "como los almacenes generales del depósito, las
 "arrendadoras financieras, en materia de
 "arrendamiento financiero y puro, las sociedades
 "de ahorro y préstamo, en materia de ahorro de sus
 "socios, las uniones de crédito, mediante el
 "fomento del crédito a sus agremiados, las
 "empresas de factoraje financiero, mediante
 "operaciones de factoraje y las casas de cambio.
 "- - - Del análisis de las estructuras financieras
 "antes descritas se concluye con meridiana
 "claridad, que la institución que represento no tiene
 "relación ni aplicabilidad con respecto a las
 "facultades que la Constitución le otorga al
 "Congreso para legislar en materia económica, ya
 "que no nos encuadramos dentro del supuesto
 "normativo de la fracción X del artículo 73, nuestra
 "actividad de ninguna manera es financiera;
 "circunstancia por la que es totalmente



CORTÉ
 LA NAC
 ACUERDO
 RA S

*"inconstitucional el querer imponernos una ley que
"en relación con nuestra actividad y naturaleza
"carece de fundamento constitucional alguno para
"que seamos sujetos de ella. - - - Las instituciones
"antes mencionadas, son pertenecientes AL
"DERECHO PÚBLICO, pues éste regula la
"intervención directa del Estado para vigilar o
"garantizar el interés público, y de la lectura de las
"mismas se desprende que la única figura, que
"pudiera adecuarse a nuestra actividad como
"Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,
"es la de intermediario financiero, pero no es así,
"ya que a éste se le define como aquél que se
"encarga de captar los recursos de la sociedad
"para acomodarlos al público en general
"obteniendo una ganancia en la transacción y
"efectuando la colocación sin la específica
"indicación del cliente. - - - Para esclarecer el
"sentido del concepto de 'Actividad Financiera' me
"permito citar la siguiente tesis jurisprudencial.
"Habida cuenta de que en ésta es donde se
"interpreta la rectoría del Estado y que la definición
"que se precisa señala la diferencia que hay entre
"tal concepto y lo que las instituciones
"denominadas Cajas Populares reguladas por la
"Ley General de Sociedades Cooperativas hacen
"como actividad económica: - - -
"FINANCIAMIENTO, QUE DEBE ENTENDERSE
"POR'. - - - (Se transcribe). - - - 2.- Asimismo la ley*



**"impugnada y tildada de inconstitucional, viola en
"mi perjuicio el párrafo séptimo del artículo 25
"constitucional, adquiriendo características de una
"verdadera aberración jurídica, cuando el legislador
"en el colmo de la incongruencia, a nuestros
"organismos privados les pretende imponer
"normas de DERECHO PÚBLICO; en esto,
"precisamente, radica la esencia de la
"inconstitucionalidad de esa omisa legislación,
"pues nada justifica la irrupción arbitraria y
"contraria a derecho que mediante esta ley se
"pretende hacer a la actividad particular. - - - Lo
"anterior, debido a que en tratándose de la
"diferencia que existe entre la actividad financiera y
"la actividad privada, así como la actuación del
"Estado en su carácter de rector de la economía
"nacional en su aceptación más amplia, cabe
"señalar lo que dice el Diccionario Jurídico
"Mexicano para deslindar el aspecto financiero de
"las actividades meramente privadas, en relación
"con lo que menciona el artículo Primero de la Ley
"de Ahorro y Crédito Popular cuando expresa:
"Esta ley es de orden público y observancia
"general en todo el territorio nacional'. La doctrina
"jurídica considera tres ramas del Derecho Interno:
"El Derecho Público, el Derecho Social y el Derecho
"Privado: - - - El Derecho Público son las normas
"que reglamentan la organización y actividad del
"estado y demás organismos dotados de poder**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE SUPLENTE
PRIMEROS
A SALA

**"público y las relaciones en que interviene con tal
"carácter; relación que no se da con nuestra
"institución. - - - El Derecho Social: Está
"constituido por los elementos que señala el
"párrafo VII del artículo 25 corresponden a un
"ordenamiento jurídico incompatible que surgió
"con la autonomía de los derechos del trabajo y
"agrario y con el surgimiento del Derecho
"Económico vino a ser un conjunto de
"ordenamientos jurídicos que no se refieren a
"individuos en general que tienen un marcado
"carácter protector hacia los sectores
"económicamente débiles, pero, EL DERECHO
"ECONÓMICO TIENDE A GARANTIZAR UN
"EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES
"PARTICULARES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
"PÚBLICOS Y PRIVADOS Y UN INTERÉS
"ECONÓMICO GENERAL; en otras palabras éste
"surge para equilibrar relaciones económicas
"donde por consecuencia de una realidad social
"específica hay cierta desigualdad 'de hecho' por
"ejemplo entre patrones y trabajadores,
"terratenientes y campesinos, obreros y
"empleados, etc., etc., destacando la posición
"social de poder o de impotencia de los individuos
"para dictar medidas contra la injusticia social. Por
"tal razón no son aplicables a nuestra institución
"los preceptos de la citada ley pues éstos
"pretenden referirse al 'crédito popular' y en su**



"artículo segundo 'el sistema de ahorro y crédito
 "popular', ya que al intervenir el Derecho Social
 "Económico como regulador entre cantidades
 "económicas y grupos sociales económicamente
 "marginados al ser nuestra actividad, MERAMENTE
 "PRIVADA, es evidente que lo dispuesto por el
 "artículo 25 de la Constitución Política de los
 "Estados Unidos Mexicanos no puede ser
 "fundamento para que se nos aplique una ley
 "hipotéticamente social, a una entidad de
 "características totalmente privadas. - - - Más aún,
 "una de las características fundamentales de
 "nuestro sistema cooperativo, es precisamente la
 "absoluta igualdad que impera entre los miembros
 "(socios) de las cooperativas, lo cual se encuentra
 "plasmado en sus estatutos, así que por lo que en
 "lo que a éstas compete, no existe ningún
 "desequilibrio social que compensar, de ahí lo
 "inoficioso de la ley que se combate. - - - A fin de
 "resaltar la confusión que en la ley impugnada se
 "da en el manejo de los conceptos, me permito
 "señalar que cuando se usa como en el caso de
 "esta ley la palabra popular, específicamente
 "cuando a la letra dice: 'CRÉDITO POPULAR' esta
 "expresión debe entenderse lo relativo al 'pueblo'
 "significa el conjunto de habitantes de un país, por
 "tal motivo se da en los servicios que se prestan al
 "pueblo o sea 'al público en general' y esto desde
 "luego no corresponde al círculo cerrado de



*"actividad privada que nosotros realizamos. - - - El
"Derecho Privado: En cambio este Derecho está
"constituido por relaciones jurídicas en las que no
"interviene el Estado como Poder, si no en las que
"intervienen las partes sólo por interés particular.
"No hay voluntad superior que se imponga. Todas
"las partes interesadas pueden hacer valer su
"propia voluntad de conformidad con las leyes
"aplicables. Estas relaciones jurídicas son la
"materia propia del derecho privado. Dentro de este
"concepto figuran el Derecho Civil, el Derecho
"Mercantil y el Derecho Internacional Privado,
"motivo por el cual, al ser encuadrada nuestra
"Cooperativa por la Ley General de Sociedades
"Mercantiles, en su artículo I con una
"reglamentación especial designada NUEVA LEY
"DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, y siendo tanto
"ésta, como la Ley General de Sociedades
"Mercantiles y su ley adjetiva, de Derecho Privado,
"necesariamente se infiere que nuestra cooperativa
"no puede ser legislada por disposiciones de
"carácter público o social, sino sólo por aquéllas
"que pertenecen al derecho privado. - - - Asimismo
"cabe señalar la definición que el diccionario
"Jurídico Mexicano da del concepto: - - -
"FINANCIERO.- (Adj.) Perteneciente o relativo a la
"Hacienda Pública, a las cuestiones bancarias y
"bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. -
"- - De lo antes expuesto, se esclarece de manera*



"categórica, que por principios, naturaleza,
 "vocación, actividad y fin, son las cajas populares
 "de las características señaladas en supralíneas,
 "entidades de derecho privado. - - - 3.- Se violan
 "también el artículo 25 de la Constitución Política
 "de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que en
 "la parte que nos interesa dice: - - - (Se transcribe).
 "- - - Viola en mi perjuicio lo estipulado por el
 "artículo 26 de nuestro Ordenamiento Supremo ya
 "que provoca una verdadera confusión no sólo en
 "cuanto a la división doctrinal que en el derecho
 "mexicano se tiene respecto a la forma en que la
 "autoridad se relaciona jurídicamente con el
 "gobernado; si no que va contra todos los
 "principios y consideraciones de naturaleza moral
 "y social que impulsaron al legislador al expedir la
 "norma jurídica contenida en este artículo, pues
 "ésta habla de imprimir solidez, dinamismo,
 "permanencia y equidad al crecimiento de la
 "economía y la multicitada ley hace precisamente
 "lo contrario, pues lisa y llanamente nos aniquila, y
 "que yo sepa ni en este artículo, ni en ningún otro
 "del texto constitucional existen las palabras
 "gravar, entorpecer, complicar, burocratizar u otras
 "similares; y se divorcia completamente de este
 "precepto cuando en el mismo se habla de
 "democratización política, la cual se conculca
 "mediante esta ley al pretender regularnos casi
 "como si fuéramos instituciones bancarias,



*"poniéndonos en franca desigualdad con éstas, ya
"que como todos sabemos las Cajas Populares
"entre otras cosas surgen como consecuencia de
"la imposibilidad de sus agremiados de participar
"en los organismos financieros y bursátiles, esto
"es, que por su naturaleza comercial y
"especulativa, aquéllos manejan dinero caro y lo
"sencillo y simple de nuestras cooperativas, es lo
"que hace accesible el crédito a nuestros socios;
"razón por la cual con tantas regulaciones,
"burocratismo, requisitos administrativos, de
"trámite, fondos de reserva y demás accesorios
"que son similares al de las instituciones
"financieras, va a ser imposible que nuestros
"socios puedan continuar participando del
"beneficio que nuestras agrupaciones que en las
"condiciones actuales les brindan, en otras
"palabras, todas estas disposiciones a lo único que
"nos llevarían es a destruir la esencia del
"cooperativismo. - - - 4.- En síntesis, se concluye
"con precisión inequívoca que esta ley, viola mi
"garantía individual consagrada en el artículo 16 de
"la Constitución General de la República, ya que
"como quedó demostrado hasta la saciedad al no
"realizar la institución que represento servicios
"financieros, no está facultado el H. Congreso de la
"Unión para legislarme con fundamento en este
"precepto de la manera que lo hace, o sea con
"disposiciones pertenecientes al Derecho Público;*



"tan es así que el artículo primero, párrafo segundo
"de la combatida ley, a la letra dice: '... Esta ley es
"de orden público y observancia general en todo el
"territorio nacional ...'. También viola la garantía
"individual antes señalada al considerarnos por
"esta ley sujetos de Derecho Social, y en
"consecuencia fundarse erróneamente en lo
"estipulado por el artículo 25 constitucional, pues
"también se dejó bien claro que nuestra institución
"no tiene absolutamente nada que ver con el
"Derecho Social que se consagra en este artículo
"por ser sociedades de naturaleza privada;
"asimismo es también la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular aparte de inconstitucional,
"anticonstitucional al pretender imponer normas
"totalmente contrarias al espíritu y señalamientos
"que se enmarcan en el artículo 26 de la Carta
"Magna; siendo esto óbice, para que por virtud de
"la ley impugnada se nos llegara a molestar en
"nuestro domicilio, posesiones o papeles por
"mandamiento de autoridad incompetente que no
"funda ni motiva conforme a Derecho la causa legal
"de su procedimiento. - - - Para la cuestión que en
"este juicio se dirime, concretamente en lo relativo
"a la interposición que se hace de varios
"ordenamientos jurídicos, que se obran en el
"DECRETO por el que se expide la presente ley y
"que en la parte que nos interesa a la letra dice: '...
"y se reforman y derogan diversas disposiciones



TE DE
CION
DOS DE
ALA

"de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas ...". A efecto de entender que la aplicación de la ley actual no implica el consentimiento del acto, me permito señalar la siguiente tesis jurisprudencial: - - - 'LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES. AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUÉLLOS'. (Se transcribe). - - - Además, este H. Juzgado debe de analizar la constitucionalidad de la ley, en razón de la siguiente tesis jurisprudencial: - - - 'LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA'. - - - (Se transcribe). - - - En síntesis, considero que pocas veces se ha expedido una ley tan inconstitucional como ésta que nos ocupa, tan contraria a los preceptos constitucionales y a los propósitos sociales que impulsaron al constituyente a la creación de nuestra Carta Magna, misma, que de ninguna manera está comprometida con los intereses de un voraz, neo-liberalismo. - - - 5.- Las disposiciones legales y actos reclamados son violatorios directamente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos (sic). - - - En efecto, en el artículo 1° constitucional, se establece que las garantías individuales no podrán restringirse ni suspenderse si no en los



"casos y con las condiciones que ella misma
"establece. Esto significa que una ley secundaria u
"ordinaria, como lo es la referida ley titulada (sic) de
"inconstitucional, no puede restringir ni suspender
"las garantías individuales. - - - No obstante la clara
"limitación constitucional referida al alcance de las
"normas legisladas secundarias, la ley titulada de
"inconstitucional tiene la pretensión de restringir
"tajantemente no solamente el derecho de
"audiencia que consagra el artículo 14
"constitucional párrafo segundo y el derecho de
"acción judicial que consagra el artículo 17 sino
"también pretende restringir a mi representada y
"privar (SUSPENDER) de los derechos adquiridos
"que de suyo son parte de su patrimonio y que
"protege el artículo 1º constitucional, sin apegar
"las responsables a los lineamientos enmarcados
"constitucionalmente en los numerales 14, 16 y 17
"de nuestra Carta Magna; con lo cual mi
"representada se le deja en completo estado de
"indefensión toda vez que no se le respetó con la
"promulgación de la citada ley de su derecho de
"audiencia, con lo que se le priva sin previo
"mandamiento judicial de sus derechos adquiridos
"para poder continuar cumpliendo con el objeto
"para el que se creó; y para agravar más la
"violación a las garantías constitucionales de mi
"representada por parte de las responsables en
"ningún momento se acreditó vía autoridad



RTE DE
NACION
UERDOS
SALA

*"jurisdiccional que mi representada haya afectado
"derechos de terceros o de la sociedad. - - - En
"efecto, conforme al segundo párrafo del artículo
"14 constitucional, dispone, que NADIE puede ser
"privado de sus derechos, si no mediante juicio
"seguido ante los tribunales previamente
"establecidos , en el que se cumplan las
"formalidades del procedimiento y conforme a las
"leyes expedidas con anterioridad al hecho. Con lo
"que tenemos que los derechos constituidos y
"legalmente adquiridos de mi representada; han
"sido violentados con la promulgación y
"publicación de la ley que se combate dado que sin
"mediar un procedimiento jurisdiccional se le ha
"privado de los mismos sin respeto a la garantía
"constitucional de audiencia consagrada en el
"citado precepto toda vez que con la promulgación
"y publicación de la ley combatida, se le obliga
"arbitrariamente a mi representada no sólo a
"cambiar el objeto por la cual fue legalmente
"constituida por indeterminado, sino que también
"se le imponen otras cargas legales para que
"pretenda poder continuar en su funcionamiento
"que no se encontraban previstas en la ley
"correspondiente en base a la cual obtuvo su vida
"jurídica e implícitamente personalidad y
"patrimonio propio y lo cual aun más grave se le
"está privando de su existencia jurídica ya que con
"la ley combatida, prácticamente se pretende la*



"desaparición en el mundo jurídico de mi
"representada, violentando con ello la garantía de
"seguridad jurídica prevista precisamente el citado
"artículo 14 constitucional y que en su párrafo
"primero textualmente señala: 'A ninguna ley se
"dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
"alguna' es decir, que no se deben violentar los
"derechos ya adquiridos por mi representada ~~bajo~~
"una normatividad positiva bajo la cual se
"constituyó, lo cual en la especie está
"aconteciendo al aplicar por parte de las
"responsables retroactivamente la ley tildada de
"inconstitucional, sirviendo para robustecer lo
"afirma (sic) me permito transcribir el siguiente
"criterio jurisprudencial, que a la letra establece:
"- - - Novena Época. - - - Instancia: Pleno. - - -
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta. - - - Tomo: VI, noviembre de 1997. - - -
"Tesis: P./J. 87/97. - - - Página: 7. - - -
"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU
"DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE
"LOS COMPONENTES DE LA NORMA'. (Se
"transcribe). - - - 6.- Asimismo, causa agravio a mi
"representada la combatida ley toda vez que se
"conculca la garantía prevista y sancionada en el
"artículo 5° constitucional y que a la letra señala en
"la parte conducente: (se transcribe). - - - En el
"caso concreto, se está privando a mi representada
"vía la ley combatida de continuar cumpliendo con



RTE DE
NACION
JERDOS
SALA

"el objeto para el cual fue creada. Sin que en la especie se haya acreditado en forma satisfactoria que mi representada haya atacado derechos de tercero y más aún, que haya ofendido los derechos de la sociedad; que al contrario, es precisamente la sociedad quien ha dado vida a la institución que represento. - - - Si bien señala el artículo 2° de la combatida ley de manera textual establece lo siguiente: (lo transcribe). También lo es que implícitamente se reconoce a mi representada el carácter de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, con el que se ha ostentado, incurriendo la combatida ley en severas contradicciones al nulificar posteriormente dicho carácter de mi representada en el numeral 6 que a la letra dice: (se transcribe). - - - Con lo cual en el caso concreto se ve coartada la libertad de mi representada para continuar cumpliendo con la actividad plasmada en su objeto social para la cual fue creada y que de acuerdo a dicho numeral transcrito es viable dicha limitación por el solo hecho de expresar dichas ideas cuando en el caso concreto mi representada las ha practicado de acuerdo al marco legal conforme al cual se constituyó, ya que sin mediar juicio alguno en el cual haya sido y oído y vencido se le está privando de un derecho que ya tenía reconocido tan es así que la denominación de SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO la



"obtuvo desde un principio en base a la
"normatividad con la cual fue creada y se ha venido
"rigiendo y de que obtuvo de la Secretaría de
"Relaciones Exteriores la autorización para la
"utilización de la razón social de mi representada
"desde el mismo momento en que nació
"jurídicamente es decir desde su acta constitutiva,
"siendo además que con ello mi representada no
"solamente se le está condicionando que para el
"caso de que para continuar funcionando y
"desarrollando su actividad tiene que tener una
"autorización para el caso de ser aprobado pueda
"continuar con su actividad que ya venía realizando
"lícitamente al cumplir no solamente con todos y
"cada uno de los requisitos de la normatividad
"conforme a la cual fue constituida sino con todos
"y cada uno de los requisitos que diversas
"normatividades le impusieron, para que conforme
"a la ley combatida ya no pueda ni siquiera utilizar
"parte de su denominación legal, sino que también
"para los efectos de poder continuar con la
"actividad que le impone su objeto social la cual ya
"venía realizando lícitamente y en base a una
"normatividad que es la que se combate tiene que
"obtener una autorización para poder operar en
"algo que concretamente ya venía operando como
"se ha dicho en forma lícita y en base a la Ley
"General de Sociedades Cooperativas. - - - 7.- De
"igual manera causa agravio a mi representada la



TE DE
ICION
DOS DE
ALA

*"violación que en forma flagrante se origina de la
"combatida ley que se tilda de inconstitucional; al
"artículo 14 constitucional en su párrafo segundo y
"que a la letra señala: (se transcribe). Ello es así,
"por el simple hecho, de que con la aprobación,
"promulgación y publicación y entrada en vigor de
"la combatida ley se priva de sus derechos ya
"adquiridos con anterioridad, a mi representada,
"toda vez que sin mediar juicio alguno se aprobó la
"combatida ley dejando en estado de indefensión a
"mi representada, afectando con ello las
"posesiones y derechos, que de suyo se generan
"de manera intrínseca por la actividad que lleva a
"cabo mi representada. - - - Ello, aunado al hecho
"de que en ningún momento se siguió el juicio
"correspondiente y ante tribunales previamente
"establecidos por parte de las responsables,
"incumpliendo con ello en las formalidades
"esenciales del procedimiento y mucho menos
"sometiéndose al veredicto de la autoridad
"jurisdiccional, ya que preponderantemente en los
"artículos de la ley que se tilda de inconstitucional
"y que a continuación se transcriben se afecta la
"esfera jurídica de mi representada: - - - 'Artículo
"2º'. (Se transcribe). - - - 'Artículo 6º'. (Se
"transcribe). - - - 'Artículo 7º'. (Se transcribe). - - -
"'Artículo 9º'. (Se transcribe). - - - 'Artículo 138'. (Se
"transcribe). - - - 'ARTÍCULO TERCERO'. (Se
"transcribe). - - - 'ARTÍCULO 26'. (Se transcribe).*



"- - - 'ARTÍCULO 33'. (Se transcribe). - - - Artículos
"transitorios: - - - 'PRIMERO'. (Se transcribe). - - -
"'SEGUNDO'. (Se transcribe). - - - 'TERCERO'. (Se
"transcribe). - - - Como se puede apreciar de los
"artículos antes transcritos de la ley tildada de
"inconstitucional se le está privando ilegalmente de
"derechos que ya tenía previamente constituidos
"dado que mi representada está legalmente
"constituida bajo el marco jurídico de la Ley
"General de Sociedades Cooperativas promulgada
"y publicada en el Diario Oficial de la Federación el
"día 03 de agosto de 1994, con la cual mi
"representada nace jurídicamente como persona
"moral con la denominación de CAJA SANTA
"MARÍA MAGDALENA (SIC) SOCIEDAD
"COOPERATIVA DE CONSUMO DE AHORRO Y
"PRÉSTAMO, legalmente constituida, PARA
"OPERAR POR TIEMPO INDEFINIDO, CONTANDO
"DESDE ESE MOMENTO EN QUE SE CONSTITUYÓ
"CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO
"PROPIOS, obteniendo el permiso de la Secretaría
"de Relaciones Exteriores para utilizar dicha
"denominación, se da de alta ante la Secretaría de
"Hacienda y Crédito Público como persona moral
"contribuyente para los fines y efectos fiscales
"conducentes, así como también se dio de alta ante
"el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte
"patronal, obteniendo también la licencia municipal
"de funcionamiento respectiva, ha cumplido con



PARTE DE
NACION
RDOS DE
SALA

*"todos los requisitos exigidos por las diversas
"disposiciones legales para el funcionamiento lícito
"a la cumplimentación del objeto para el cual fue
"constituida mi representada. Con lo cual mi
"representada adquirió a partir de su legal
"constitución derechos inherentes a su
"personalidad que pasaron a formar parte de su
"patrimonio de los cuales no puede ser privado mi
"representada sino mediante resolución judicial y
"bajo ciertos requisitos que en caso concreto no se
"han actualizado, más sin embargo la citada ley
"impugnada y tildada de inconstitucional está
"privando de los derechos a mi representada como
"lo son concretamente el de poder y continuar
"existiendo regida por un marco jurídico bajo el
"cual fue creada y obtuvo personalidad y
"patrimonio propio y de que para la utilización de
"su nombre obtuvo permiso por tiempo indefinido
"de la Secretaría de Relaciones Exteriores para
"denominarse tal y como ya ha quedado expresado
"y de que la actividad que realiza en base a su
"objeto social para la cual fue creada deja de existir
"única y exclusivamente porque las autoridades
"señaladas como responsables, unilateralmente y
"sin que a mi representada se le haya respetado su
"garantía de audiencia y de legalidad previstos y
"sancionados en los artículos 14 y 16
"constitucionales reforman el artículo 26 de la Ley
"General de Sociedades Cooperativas, para quedar*



"finalmente como a continuación se transcribe:
"'Artículo 26'. (Se transcribe), cuando su redacción
"original antes de dicha reforma textualmente
"señalaba lo siguiente: (se transcribe), con lo cual
"puede apreciarse que efectivamente aunque mi
"representada se constituyó legalmente en base a
"la ley antes citada y su objeto social lo es
"preponderantemente la captación de recursos
"entre sus socios para su colocación entre los
"mismos mediante el otorgamiento de préstamos
"tal y como se desprende del capítulo de
"antecedentes y que con la reforma del citado
"artículo mi representada ya no podrá dedicarse a
"dicha actividad única y exclusivamente porque las
"autoridades responsables así lo decidieron
"unilateralmente sin respetar su derecho de
"audiencia y de legalidad; mas aún por si lo
"anterior no fuera suficiente resulta que mi
"representada en base a la Ley General de
"Sociedades Cooperativas marco legal bajo el cual
"fue constituida y bajo la cual se regía sus
"actividades que se desprenden de su objeto social
"y que venía desarrollando lícitamente cumpliendo
"con todos y cada una de las normatividades
"aplicables, resulta que conforme a lo dispuesto
"por la ley tildada de inconstitucional, no
"solamente va a tener que realizar los trámites
"necesarios para poder continuar operando algo
"que ya le estaba autorizado por la Ley General de



TE DE
ACION
RDOS DE
SALA

*"Sociedades Cooperativas y de que para el caso de
"que no obtenga dicha autorización tendrá que
"dejar de realizar sus operaciones bajo la pena de
"que si no deja de realizar sus operaciones luego
"entonces se ubicarán en los supuestos de
"infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular en su capítulo respectivo, con lo cual las
"autoridades responsables unilateralmente
"convierten la actividad que mi representada viene
"realizando lícitamente y de que de continuarla
"realizando sin obtener una autorización dicha
"actividad la convierten en ilícita con el riesgo
"inclusive que sus principales funcionarios se
"hagan acreedores a penas privativas de libertad
"con lo cual y violando las garantías de audiencia y
"de legalidad de mi representada previstas y
"sancionadas en los artículos 14 y 16
"constitucionales, ya que el artículo 14
"constitucional determina que los actos de
"privación a que se refiere deben hacerse conforme
"a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y
"el artículo 16 de la Carta Magna determina que los
"actos de molestia deben de ser fundados y
"motivados, con lo que nos encontramos que la
"disposición legal tildada de inconstitucional es
"violatoria de los preceptos citados de nuestra
"Carta Magna como también del artículo 133
"constitucional el cual en efecto establece una
"supremacía de las normas constitucionales frente*



"a las normas legales secundarias; por lo que a
"través de los actos reclamados en este juicio de
"amparo, mediante una disposición legal
"secundaria combatida en la presente demanda, se
"establecen profundas restricciones a las garantías
"de AUDIENCIA y de LEGALIDAD, trastocando el
"orden jurídico que le da como debe de ser, mayor
"valor a las normas constitucionales, ya que como
"en la especie acontece con la promulgación y
"publicación de ley tildada de inconstitucional se
"priva a mi representada de derechos que ya tenía
"constituidos y reconocidos que forman parte de
"su patrimonio de los cuales se le están privando
"de forma unilateral y por demás arbitraria por
"parte de las autoridades señaladas como
"responsables ya que mi representada está siendo
"privada de su libertad en cuanto a su actividad
"lícita que ha venido desarrollando y de sus
"derechos ya constituidos con anterioridad a dicha
"ley y que forman parte de su patrimonio sin haber
"mediado juicio ante los tribunales previamente
"establecidos, en las que se cumplan las
"formalidades esenciales del procedimiento y
"conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
"hecho y está siendo molestada al restringirles sus
"derechos sin que medie mandamiento escrito de
"la autoridad competente, sirviendo para
"robustecer lo antes manifestado me permito
"transcribir los siguientes criterios



PARTE DE
NACIONAL
GUERDOS
SALA

"jurisprudenciales, que a la letra establecen: - - -
"Novena Época. - - - Instancia: SEXTO TRIBUNAL
"COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
"CIRCUITO. - - - Fuente: Semanario Judicial de la
"Federación y su Gaceta. - - - Tomo: IV, octubre de
"1996. - - - Tesis: I.6°.C.28 K. - - - Página: 547. - - -
"GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS
"SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL
"INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA
"SALVAGUARDAR ÉSTOS'. (Se transcribe). - - -
"Novena Época. - - - Instancia: Pleno. - - - Fuente:
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. -
"- - Tomo: IV, julio de 1996. - - - Tesis: P./J. 40/1996.
"- - - Página: 5. - - - 'ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS
"DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA
"DISTINCIÓN'. (Se transcribe). - - - Novena
"Época. - - - Instancia: Pleno. - - - Fuente:
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. -
"- - Tomo: II, diciembre de 1995. - - - Tesis: P./J.
"47/95. - - - Página: 133. - - - 'FORMALIDADES
"ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS
"QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
"OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
"PRIVATIVO'. (Se transcribe). - - - Octava Época.
"- - - Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
"DEL QUINTO CIRCUITO. - - - Fuente: Semanario
"Judicial de la Federación. - - - Tomo: XIII, junio de
"1994. - - - Página: 529. - - - 'AUDIENCIA
"GARANTÍA. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY



**"EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN, NO PREVEA
"EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO". (Se
"transcribe). - - - Octava Época. - - - Instancia:
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
"PRIMER CIRCUITO. - - - Fuente: Semanario
"Judicial de la Federación. - - - Tomo: X, noviembre
"de 1992. - - - Página: 244. - - - 'CONSTITUCIÓN,
"ATAQUES DIRECTOS A LA. CUANDO **NO**
"EXISTEN'. (Se transcribe)". (Fojas 4 a 19 ídem.).**

SEGUNDO. Por auto de diecinueve de julio de dos mil uno, la Juez Primero de Distrito "A" en el Estado de Querétaro, a quien por turno reglamentario tocó conocer del asunto, admitió la demanda, registrándola con el número 859/2001-1-A; posteriormente, mediante Acuerdo General 62/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Primero de Distrito "A" en el Estado de Querétaro, pasó a ser Juzgado Tercero de Distrito en la propia entidad federativa, por lo que el juicio de amparo en cuestión pasó a ser el número 541/2001-1, seguido el juicio por todos sus trámites legales, el veintitrés de mayo de dos mil dos, se autorizó la sentencia respectiva, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

**"PRIMERO.- El juicio de amparo 859/2001-I-A, del
"índice del Juzgado Primero de Distrito 'A', del
"Estado, cambia al número 541/2001-I, del índice de
"este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
"Querétaro; lo anterior en atención al Acuerdo
"62/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura**

*"Federal, por el que se determinó entre otras
"cuestiones, la conclusión de los Juzgados
"Primero de Distrito 'A' y 'B', y el inicio del Juzgado
"Tercero de Distrito, a partir del cinco de noviembre
"del dos mil uno, mismo que conforme a dicho
"acuerdo conocerá, tramitará y resolverá los
"asuntos que se radicaron en el Juzgado Primero
"de Distrito 'A', entre los cuales se encuentra este
"juicio de garantías. - - - SEGUNDO.- La Justicia de
"la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la empresa
"denominada CAJA INDEPENDENCIA S.C.L.
"SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE
"AHORRO Y PRÉSTAMO DE R.L. DE C.V., en contra
"de los actos reclamados a las autoridades
"señaladas como responsables, mismos que
"precisados quedaron en el resultando primero de
"esta resolución". (Fojas 187 vuelta y 188 ídem).*

Dicha resolución se apoya en las siguientes consideraciones:

*"QUINTO.- No existiendo diversa causal de
"improcedencia que hagan valer las partes, ni que
"se advierta de oficio, es procedente entrar al
"estudio de la constitucionalidad del acto
"reclamado, encontrando que los conceptos de
"violación vertidos por el representante legal de la
"quejosa, son infundados en una parte e
"inoperantes en otra. - - - En este orden, tenemos*



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE LA NACION
ACUERDOS DE RA SALI

"que el representante legal de la parte quejosa
"alega en sus conceptos de violación que, la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular, por su sola expedición
"le causa perjuicio en su esfera jurídica, y en
"consecuencia viola en su agravio las garantías
"individuales contenidas en los artículos 16
"séptimo párrafo, 25 y 26 constitucionales. - - - En
"efecto, alega el promovente que el legislador se
"fundó en el artículo 73, fracción X de la
"Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, no obstante que la sociedad que él
"representa, no tiene relación con las facultades
"que en esa fracción del citado artículo de la
"Constitución le otorga al Congreso para legislar,
"porque según el inconforme, la institución que
"representa no realiza actividad financiera alguna,
"por lo que afirma que al pretender considerar la
"ley impugnada a la sociedad cooperativa que
"representa como una institución que realiza
"actividades financieras la ley debe declararse
"inconstitucional. - - - En efecto el artículo 73,
"fracción X, de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente: - - -
"(Se transcribe). - - - De la transcripción antes
"realizada se advierte que una de las facultades del
"Congreso de la Unión lo es la de legislar entre
"otros aspectos sobre '... comercio ...'. - - - En este
"orden, es menester precisar que el artículo 3º,
"fracción II del Código de Comercio dispone: - - -

*"(Se transcribe). - - - Ahora bien, la Ley General de
"Sociedades Mercantiles, en el artículo 1º, fracción
"VI prevé: - - - (Se transcribe). - - - De la
"transcripción de las fracciones de los citados
"artículos se advierte que las sociedades
"cooperativas como la que en la especie solicita el
"amparo y protección de la Justicia Federal, tienen
"la calidad de comerciantes, por otorgarles ese
"carácter la Ley General de Sociedades
"Mercantiles. - - - Bajo ese contexto, la
"inconformidad en análisis es infundada, pues si el
"Congreso de la Unión se fundó en el artículo 73,
"fracción X, constitucional, para expedir la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular que ahora se impugna,
"lo fue con base en las facultades que dicha
"fracción le confiere cuando establece: 'El
"Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda
"la República sobre ... comercio'. - - - Por lo
"anterior, aun y cuando la transcrita fracción,
"otorgue al Congreso además de la facultad
"transcrita, entre otras, la de legislar sobre
"intermediación y servicios financieros', lo cierto
"es que no fue en base a dicha facultad que el
"referido organismo expidió la ley tildada de
"inconstitucional, sino que tal expedición se realizó
"como ya se dijo, porque el Congreso está
"facultado para legislar, entre otros aspectos,
"sobre comercio. - - - Es aplicable en lo que
"interesa la tesis sustentada por el Pleno de la*



**"Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada
"en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta
"Época, Tomo CXXVIII, página 180, que dice: - - -
"COOPERATIVA DEMANDADA EN JUICIO
"ORDINARIO MERCANTIL, COMPETENCIA'. (Se
"transcribe). - - - Por otra parte, alega el inconforme
"que se viola en perjuicio de su representada el
"artículo 25 constitucional cuando el legislador con
"la expedición de la citada ley pretende imponer
"normas de derecho público, a organismos
"privados como el que representa, ello en virtud de
"que la mencionada ley, en el último párrafo de su
"artículo primero dispone: - - - (Se transcribe). - - -
"Que del artículo antes transcrito se advierte la
"pretensión del legislador de aplicar una norma de
"derecho público a una sociedad cooperativa que
"es de carácter privado, por lo que al ser su
"actividad meramente privada, lo dispuesto en el
"artículo 25 constitucional no podría ser
"fundamento para que se aplique una ley
"hipotéticamente social a una entidad de tales
"características; que la Ley General de Sociedades
"Cooperativas es de derecho privado, y que de ahí
"se infiere el hecho de que su representada no
"pueda ser legislada por disposiciones de carácter
"público o social, sino sólo por aquéllas que
"pertenecen al derecho privado como lo es la
"citada en último término. - - - En efecto, el artículo
"25, párrafo séptimo de la Constitución Política de**



ORTE DE
NACIÓN
UERDOS DE
SALA

"los Estados Unidos Mexicanos establece lo
"siguiente: - - - (Se transcribe). - - - Ahora, el
"artículo 1° último párrafo de la Ley impugnada
"prevé: - - - (Se transcribe). - - - De lo transcrito en
"párrafos precedentes, se infiere contrario a lo
"alegado por el inconforme, que el propio artículo
"25 constitucional dispone que la ley establecerá
"los mecanismos que faciliten la organización y la
"expansión de la actividad económica del sector
"social, de entre los cuales expresamente señala a
"las cooperativas; de ahí que sí sea factible y
"constitucional que dicho artículo 25 de nuestra
"Carta Magna, sea el fundamento para aplicar la
"Ley de Ahorro y Crédito Popular tildada de
"inconstitucional. - - - Además de lo antes dicho, la
"personalidad jurídica de las sociedades deriva de
"un acto de voluntad del Estado, pues como el
"artículo 25 constitucional lo dispone, él mismo
"planeará, condicionará, coordinará y orientará la
"actividad económica nacional y llevará a cabo la
"regulación y fomento de las actividades que
"demande el interés general, condicionado al
"cumplimiento de las disposiciones de orden
"público de la ley relativa a la constitución de
"sociedades, como lo fue en un principio la Ley
"General de Sociedades Mercantiles y la Ley
"General de Sociedades Cooperativas, esta última,
"conforme a la cual se constituyó y reguló sus
"actividades la empresa quejosa, hasta antes de la

RTE DE
NACION
JERDOS DE
SALA

**"entrada en vigor de la ley que ahora se impugna
"de inconstitucional. - - - Bajo las anteriores
"premisas, se deduce que la Ley de Ahorro y
"Crédito Popular publicada el cuatro de junio del
"dos mil uno, en el Diario Oficial de la Federación y
"vigente a partir del día siguiente, no debe
"declararse inconstitucional por la razón expresada
"por el promovente, en el sentido de que dicha ley
"por ser de orden público no puede aplicarse a una
"entidad de características privadas como las de la
"hoy quejosa. - - - Lo anterior es así pues como ya
"se dijo, la personalidad jurídica de la peticionaria
"de garantías, se constituyó con base en una ley de
"orden público, como lo es la Ley General de
"Sociedades Cooperativas, expedida conforme al
"artículo 25 constitucional; en base al cual también
"se expidió la Ley de Ahorro y Crédito Popular que
"ahora se tilda de inconstitucional y que también es
"de orden público y observancia general en todo el
"territorio nacional, circunstancia que no impide
"que la misma sea aplicada a una sociedad privada,
"pues la constitución de ésta se encuentra
"regulada por el Código de Comercio, la Ley
"General de Sociedades Mercantiles, la Ley General
"de Sociedades Cooperativas, y ahora por la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular, siendo todas éstas
"contrario a lo alegado por el inconforme, de orden
"público, como se advierte en concreto de la
"lectura de la última parte del artículo 1° de la Ley**

*"General de Sociedades Cooperativas conforme a
"la cual se constituyó la hoy quejosa, cuando dice:
"- - - (Se transcribe). - - - Es decir, la ley conforme a
"la cual reguló sus actividades la hoy quejosa
"hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular, también era de interés
"social y observancia general en todo el territorio
"nacional. - - - Por otra parte, aun y cuando el acto
"reclamado en la demanda de garantías lo
"constituye también la 'derogación de diversas
"disposiciones de la Ley General de
"Organizaciones y Actividades Auxiliares de
"Crédito y de la Ley General de Sociedades
"Cooperativas', este órgano de control
"constitucional, se encuentra en imposibilidad
"jurídica de abordar su estudio, desde el momento
"en que el quejoso no expresó conceptos de
"violación que razonaran el por qué estima
"inconstitucional dicha derogación de algunos
"artículos de las mencionadas leyes; además de
"que tampoco precisa cuáles fueron las
"disposiciones legales que fueron derogadas, ni las
"razones por las cuales consideran que su
"derogación le ocasionaría perjuicio, pues de
"hacerlo, se incurriría en suplencia de la queja
"deficiente, en un caso en el que no se encuentra
"autorizada para hacerlo, al no cobrar vigencia
"alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la
"Ley de Amparo y al tenor de las tesis sustentadas*



"por la Primera Sala de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario
"Judicial de la Federación, Tomos V, Primera Parte,
"Enero Junio de 1990 y VII, junio de 1991, páginas
"83 y 78, respectivamente, las cuales, en su orden,
"son del tenor literal siguiente: - - - 'AMPARO
"CONTRA LEYES. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE
"VIOLACIÓN RESPECTO DEL ORDENAMIENTO
"COMBATIDO. SUPLENCIA DE LA QUEJA'. (Se
"transcribe). - - - 'SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO
"TIENE APLICACIÓN EN EL AMPARO CONTRA
"LEYES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, EL
"PRINCIPIO DE'. Se transcribe. - - Asimismo,
"alega el inconforme que la ley impugnada viola el
"artículo 26 constitucional, porque va en contra de
"los principios y consideraciones de naturaleza
"moral y social que impulsaron al legislador a
"expedir la norma jurídica contenida en este
"artículo, porque afirma que la multicitada ley
"aniquila a la sociedad como la que representa,
"porque pretende regularla como a las
"instituciones bancarias, poniéndolos en
"desigualdad con éstas. - - - Dichos argumentos
"son inatendibles, pues el promovente del amparo,
"no precisa cuáles son los artículos de la ley
"impugnada que según el inconforme pretenden
"aniquilar a la sociedad cooperativa quejosa, ni
"tampoco expone las consideraciones a través de
"las cuales ponga de manifiesto las circunstancias



PRTE DE
NACION
RDOS DE
SALA

"por las que afirma se le pretende aniquilar, o a través de los cuales se le pretenda regular como a las instituciones bancarias. - - - Es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, página 416, que dice: - - - 'AMPARO CONTRA LEYES, TRATÁNDOSE DE, NO EXISTE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA'. (Se transcribe). - - - En este orden, tenemos que la peticionaria del amparo alega que la ley tildada de inconstitucional infringe el artículo 1° de la Carta Magna, porque pretende restringir el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 constitucional y de acción judicial comprendido en el artículo 17 constitucional; así como restringir y privar a su representada de los derechos adquiridos que son parte de su patrimonio; que no se le respetó su derecho de audiencia y que en ningún momento se acreditó que su representada haya afectado derechos de terceros. - - - En relación con lo anterior debe decirse que contrario a lo alegado por la inconforme, con la promulgación y publicación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, no se infringió en perjuicio de la empresa quejosa la garantía de audiencia y legalidad, toda vez que conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal de la República, en los artículos 71, 72 y demás relativos al proceso legislativo, no prevé que deba llamarse al mismo a



CORTE
NACIONAL
DE
AJUSTES
A LA
CONSTITUCIÓN

"todos aquéllos que se pudieran ver afectados por
"las normas que se pretendan crear. - - - Ahora bien
"manifiesta la quejosa que con la promulgación y
"publicación de la ley, se le obliga arbitrariamente a
"cambiar el objeto por el cual fue constituida y para
"continuar con su funcionamiento se le imponen
"otras cargas legales que no se encontraban
"previstas en la ley; que se le está privando de su
"existencia jurídica ya que se pretende la
"desaparición de su representada y que esto está
"aconteciendo al aplicar las responsables
"retroactivamente la ley tildada de inconstitucional.
"- - - Dichas manifestaciones resultan inatendibles,
"pues el promovente no expresó conceptos de
"violación que razonaran el porqué la ley tildada de
"inconstitucional la obliga a cambiar el objeto por
"el cual fue constituida, ni tampoco manifiesta en
"qué artículos ni por qué razones considera que
"dicha ley le impone diversas cargas legales a las
"impuestas en la Ley General de Sociedades
"Cooperativas conforme a la cual surgió la
"sociedad ahora quejosa, ni cuáles son esas
"cargas y menos aún aduce las razones por las
"cuales considera que dichas obligaciones le
"causen algún perjuicio a su representada,
"asimismo tampoco señala a través de cuál
"disposición legal de la ley tildada de
"inconstitucional se está privando la existencia
"jurídica de su representada; por lo que al no haber

*"emitido consideración alguna en relación con
"dichas manifestaciones, las mismas son
"inatendibles, pues de estudiarlas se incurriría en
"suplencia de la queja deficiente, en un caso en el
"que no se encuentra autorizada para hacerlo, al no
"cobrar vigencia alguna los supuestos del artículo
"76 bis de la Ley de Amparo. - - - También aduce la
"inconforme que se viola en perjuicio de su
"representada el contenido del artículo 5
"constitucional, porque se le priva de continuar
"cumpliendo con el objeto para el cual fue creada,
"sin que se haya acreditado que su representada
"haya atacado derechos de terceros o haya
"ofendido los derechos de la sociedad; que el
"artículo 2 de la ley tildada de inconstitucional
"reconoce a su representada el carácter de
"Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, y
"con posterioridad incurre en contradicción al
"nulificar dicho carácter en el numeral 6 de la
"misma ley, con lo cual afirma se le está privando
"de un derecho que ya tenía reconocido, tan es así
"que la denominación Sociedad Cooperativa de
"Ahorro y Préstamo, la obtuvo desde un principio y
"a su representada se le está condicionando el
"funcionamiento de dicha sociedad a que conforme
"a la ley combatida ya no utilice parte de su
"denominación legal y que para continuar con la
"actuación que le impone su objeto social tiene que
"obtener una autorización para poder operar en*



"algo que ya venía operando conforme a la Ley
"General de Sociedades Cooperativas, en base a la
"cual se constituyó. - - - En efecto, el artículo 2° de
"la Ley de Ahorro y Crédito Popular, prevé: - - - (Se
"transcribe). - - - Asimismo el artículo 6 del mismo
"ordenamiento legal dispone lo que a continuación
"se transcribe: - - - (Se transcribe). - - - De la lectura
"de los numerales transcritos se advierte que
"contrario a lo alegado por el inconforme, lo
"dispuesto en el artículo 6°, no contraviene lo
"establecido por el diverso precepto legal 2°, pues
"mientras éste establece que el Sistema de Ahorro
"y Crédito Popular estará integrado entre otras por
"las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
"Préstamo, como lo es la hoy quejosa, el diverso
"artículo 6° establece que las palabras 'Sociedad
"Cooperativa de Ahorro y Préstamo', u otras que
"expresan ideas semejantes en cualquier idioma,
"sólo podrán ser usadas en las denominaciones de
"las Entidades que se autoricen para operar en los
"términos de esta ley; pero no la está privando de
"la utilización de la denominación con la cual
"surgió pues sigue siendo una 'Sociedad
"Cooperativa de Ahorro y Préstamo'; además no
"condiciona el funcionamiento de dicha sociedad a
"que no utilice parte de su denominación legal y a
"que para continuar con la actuación que le impone
"su objeto social tiene que obtener una
"autorización para poder operar; y aun y cuando se



CORTE DE
NACIONES
UNIDAS DE
SALA

*"le impusieran estas condiciones, ello en nada
"afectaría a la actividad y personalidad jurídica de
"la hoy quejosa, pues los artículos segundo y
"tercero transitorios de la ley tildada de
"inconstitucional disponen: - - - (Se transcriben).
"- - - Es decir, conforme a los artículos antes
"transcritos, las Sociedades Cooperativas de
"Ahorro y Préstamo que tengan intención de
"sujetarse a los términos establecidos en la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante
"la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en un
"término no mayor a seis meses contados a partir
"de la publicación de la citada ley en el Diario
"Oficial de la Federación; asimismo, aun y cuando
"conforme al artículo tercero de la referida ley, las
"sociedades como la hoy inconforme, que no
"obtengan la autorización de la Comisión Nacional
"Bancaria y de Valores para operar como Entidad,
"deberán abstenerse de captar recursos o de
"hacerlo se encontrarán en los supuestos de
"infracción previstos por la misma ley; también es
"verdad que el mismo numeral dispone
"expresamente que las Sociedades Cooperativas
"de Ahorro y Préstamo, constituidas con
"anterioridad a la entrada en vigor de la ley tildada
"de inconstitucional, contarán con un plazo de dos
"años a partir de su vigencia, para solicitar de la
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores la
"autorización para operar como Entidad; lo cual*



"significa que si las sociedades cooperativas de
"ahorro y préstamo tienen que obtener la
"autorización aludida, no por ese solo hecho, se le
"impide a la ahora inconforme continuar con la
"actividad para la cual fue creada, ya que la propia
"ley le está concediendo el término de dos años
"para adquirir la aludida autorización; de ahí que la
"ley impugnada, contrario a lo alegado por el
"quejoso no infrinja el artículo 5° constitucional,
"pues la sociedad quejosa puede continuar con sus
"actividades al mismo tiempo que está en aptitud
"de realizar los trámites necesarios ante la
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de
"que ésta le otorgue la autorización respectiva para
"operar como 'Entidad', en términos de la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular; es decir para que pueda
"seguir desempeñándose como 'Sociedad
"Cooperativa de Ahorro y Préstamo'. - - - Por lo
"anterior, en el supuesto de que una vez solicitada
"la autorización a que se refiere el artículo tercero
"transitorio de la citada ley, la Comisión Nacional
"Bancaria y de Valores no le otorgará dicha
"autorización, la empresa ahora quejosa, podrá
"inconformarse con dicha negativa a través de los
"medios de impugnación que prevean las leyes
"secundarias aplicables, o en su caso acudir al
"juicio de amparo. - - - También alega el inconforme
"que con el contenido de los artículos 2, 6, 7, 9,
"138, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y

TE DE
ACION
IDOS DE
SALA

*"artículo tercero, 26, 33, Artículos Transitorios
"Primero, Segundo, Tercero, de la Ley General de
"Sociedades Cooperativas, se le priva ilegalmente
"de sus derechos ya constituidos conforme a la
"Ley General de Sociedades Cooperativas, con la
"cual había adquirido derechos inherentes a su
"personalidad que pasaron a formar parte de su
"patrimonio de los que no podía ser privada, sino
"mediante resolución judicial; y que sin embargo la
"ley impugnada la está privando de esos derechos,
"entre los que se encuentra el de continuar
"existiendo regida por un marco jurídico bajo el
"cual fue creada y que de la actuación que realiza
"en base a su objeto social, deja de existir sólo
"porque las autoridades responsables reformaron
"el artículo 26 de la Ley General de Sociedades
"Cooperativas, cuando el original preveía como una
"de las actividades de esas sociedades la de
"‘ahorro y préstamo’; por lo que al haberse
"suprimido ya no podrá dedicarse a esa actividad, y
"que aunado a lo anterior, conforme a la nueva ley
"va a tener que realizar diversos trámites para
"continuar operando algo que ya le estaba
"autorizado por la Ley General de Sociedades
"Cooperativas, bajo la pena de que si no lo hace y
"continúa operando, su actividad se convertirá en
"ilícita. - - - En este orden tenemos que los artículos
"2º, 6º, 7º, 9º y 138 de la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular establecen: - - - (Se transcriben). - - -*



TE DE
NACION
RDOS
SALA

**"Asimismo los numerales tercero, 26 y 33 de la Ley
"General de Sociedades Cooperativas reformada
"prevén: - - - (Se transcriben). - - - Por ultimo los
"artículos primero, segundo y tercero transitorios
"de la Ley de Ahorro y Crédito Popular disponen:
"- - - (Se transcriben). - - - Del contenido de los
"transcritos artículos se evidencia que las
"alegaciones referidas en último término, son
"infundadas, en cuanto a que el tener que regir la
"sociedad quejosa su actividad en base a la Ley
"General de Sociedades Cooperativas y la Ley de
"Ahorro y Crédito Popular, vigentes a partir del
"cinco de junio del dos mil uno, no ocasiona
"perjuicio alguno a la peticionaria del amparo, ya
"que con la entrada en vigor de la ley citada en
"último término, no la priva de los derechos que
"haya adquirido desde su constitución, pues
"ningún perjuicio le ocasiona en su patrimonio
"dicha circunstancia, ya que si bien es cierto que
"conforme al artículo tercero transitorio de la ley
"tildada de inconstitucional, las sociedades
"cooperativas que se hayan constituido con
"anterioridad a la vigencia de la misma, tendrán
"que realizar ciertos trámites ante la Comisión
"Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta las
"autorice a operar como Entidad; esto, como ya se
"dijo, en ninguna forma ocasiona perjuicio a la
"empresa quejosa, pues no se le priva de los
"derechos que haya adquirido al constituirse como**

*"sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, ni
"implica la liquidación de su sociedad, ni tampoco
"está ocasionando su desaparición dentro del
"marco jurídico, por el contrario el propio artículo
"2° ya transcrito de la misma ley, la contempla
"como parte del Sistema de Ahorro y Crédito
"Popular y el artículo 33 de la Ley General de
"Sociedades Cooperativas, específicamente prevé
"que las sociedades cooperativas que tengan por
"objeto realizar actividades de ahorro y préstamo
"se regirán por esa misma ley y por la de Ahorro y
"Crédito Popular; lo cual significa que dicha
"sociedad no estará regulada exclusivamente por la
"ley tildada de inconstitucional, sino también, entre
"otras, por la Ley General de Sociedades
"Cooperativas, según lo dispone también el artículo
"8° de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que
"dice: - - - (Se transcribe). - - - Además de lo
"expuesto en párrafos precedentes, es menester
"señalar que el artículo 26 de la Ley General de
"Sociedades Cooperativas, anterior a las reformas
"del cuatro de junio del dos mil uno, disponía: (se
"transcribe). - - - Y el mismo numeral cuya reforma
"se publicó en el Diario Oficial de la Federación del
"cuatro de junio del dos mil uno, prevé: - - - (Se
"transcribe). - - - De la transcripción del numeral
"señalado, se advierte que si bien en el contenido
"del artículo antes de las reformas, preveía como
"una de las actividades de las 'sociedades*



"cooperativas de consumidores", la de 'ahorro y
"préstamo', y el actual numeral suprimió dicha
"actividad propia de las citadas sociedades
"cooperativas; también es verdad que la quejosa
"surgió a la vida jurídica o se constituyó como
"'Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo', y
"no como 'Sociedad Cooperativa de
"Consumidores', según se advierte a foja 20 de
"este expediente; por lo que es obvio que al haber
"suprimido el transcrito artículo de la citada ley,
"una de las actividades de las sociedades
"cooperativas de consumidores, en concreto la de
"ahorro y préstamo', ello no significa que haya
"decretado la desaparición de las sociedades como
"la de la hoy quejosa, pues a la par expidió la Ley
"de Ahorro y Crédito Popular donde como ya se ha
"visto, regula específicamente la actividad de las
"sociedades cooperativas de ahorro y préstamo';
"motivo por el cual, la reforma realizada al
"multirreferido numeral en nada afecta a la empresa
"moral quejosa. - - - En consecuencia, ante lo
"infundado e inatendible de los conceptos de
"violación, lo procedente es negar el amparo
"solicitado por el representante legal de la CAJA
"INDEPENDENCIA S.C.L. SOCIEDAD
"COOPERATIVA DE CONSUMO DE AHORRO Y
"PRÉSTAMO DE R.L. DE C.V.". (Fojas 173 a 187
vuelta ídem.).



RTE DE
NACION
ERDOS DE
SALA

TERCERO. Inconforme con dicha resolución el apoderado legal de la quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual originalmente, por turno reglamentario, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, registrándose con el número 249/2002 y éste, en sesión de diez de octubre de dos mil dos, emitió la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:

"PRIMERO.- Se declina la competencia a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el recurso de revisión planteado. - - -

"SEGUNDO.- Remítase con copia certificada de la presente resolución, así como el diskette que la contenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que, además, se le remitirán los autos

"del juicio de amparo y demás constancias necesarias. - - - TERCERO.- Notifíquese

"personalmente a las partes, a las autoridades responsables por medio de oficio". (Foja

66 vuelta del cuaderno relativo al amparo en revisión 249/2002).

La sentencia de mérito, se basa en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.- En el caso, este Tribunal Colegiado, estima que el asunto es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la



RTE DE
NACION
JERDOS DE
SALA

"Nación, como enseguida se verá. - - - De la
"demanda de amparo, cuyos actos reclamados se
"precisan en el resultando primero de esta
"resolución, se advierte que Caja Independencia S.
"C. L., Sociedad Cooperativa de Consumo de
"Ahorro y Préstamo de R. L. de C. V., como actos
"reclamados, señaló la inconstitucionalidad de la
"Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada el
"cuatro de junio del dos mil uno, en el Diario Oficial
"de la Federación, así como la aprobación,
"expedición, promulgación, refrendo y publicación
"de su decreto, además la derogación de diversas
"disposiciones de la Ley General de
"Organizaciones y Actividades Auxiliares del
"Crédito y de la Ley General de Sociedades
"Cooperativas. - - - Al pronunciar la sentencia ahora
"recurrida, la Juez Tercero de Distrito en el Estado,
"previo a la negativa del amparo solicitado, declaró
"improcedentes las causales de sobreseimiento
"planteadas por las partes. - - - Ahora bien, como en
"el caso este Tribunal Colegiado no advierte que
"hubiera alguna causa de improcedencia que
"amerite el sobreseimiento del juicio, ni en los
"agravios se hacen valer, dado que la recurrente es
"la parte quejosa, además de que tampoco existe
"sobre el tema debatido, jurisprudencia del
"Tribunal Pleno o de las Salas, de la Suprema Corte
"de Justicia de la Nación, este Tribunal Colegiado,
"estima que debe dejarse a salvo la jurisdicción

"originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del presente asunto, toda vez que no se dan los supuesto del punto Quinto del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que dispone: - - - (Se transcribe). - - - Por tanto, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha establecido aún jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sobre la cual se pronunció la a quo federal, asimismo como además no existe algún precedente, y como el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, antes invocado, establece que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conservará para su resolución, los juicios de amparo en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales, no exista precedente, y a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional o que revistan un interés excepcional, o por alguna otra causa; es por ello que de conformidad con el punto décimo octavo del aludido Acuerdo General, este Tribunal Colegiado, considera pertinente remitirle los autos del juicio de amparo, así como las constancias necesarias, a fin de que el Máximo



**"Tribunal de Justicia del País, determine si a su juicio
"se requiere fijar un criterio sobre el tema de
"constitucionalidad de la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular, acorde con el punto tercero, fracción II, del
"Acuerdo General número 5/2001, antes invocado. - - -
"Asimismo, de conformidad con los puntos décimo
"cuarto y décimo octavo del Acuerdo General
"número 5/2001, notifíquese la presente resolución
"en forma personal a las partes y por medio de
"oficio a las autoridades responsables". (Fojas 64 a
66 vuelta ídem.).**



CUARTO. Remitidos que fueron los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, en proveído de treinta de octubre de dos mil dos, aceptó la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer y resolver del recurso de revisión en cuestión, radicándolo como amparo en revisión 914/2002.

El Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción formuló **pedimento** en el presente asunto, en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida, en la materia de la revisión.

Posteriormente, por auto del día cuatro de diciembre de dos mil dos, se ordenó turnar los autos para su estudio al Ministro Humberto Román Palacios.

Luego, previo dictamen del Ministro Ponente, por auto de Presidencia de diez de febrero de dos mil tres, se ordenó el envío de los presentes autos a esta Primera Sala y su Presidente, en proveído del día trece de febrero del mismo año, acordó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto, así como que se pasaran los autos para la elaboración del proyecto de resolución al Ministro a quien originalmente se habían turnado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el punto primero del Acuerdo General número 6/2003, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de marzo de dos mil tres en el cual se ordena enviar a las Salas de este Alto Tribunal, para su resolución, los asuntos anteriores al año de dos mil tres, sin que el presente asunto se ubique en las excepciones previstas en el propio punto.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al desprenderse de las constancias existentes, que la sentencia recurrida fue autorizada el veintitrés de mayo de dos mil dos y notificada a la parte quejosa mediante lista publicada el día veintisiete siguiente, por lo que el término de diez



días señalado en el artículo de mérito transcurrió del día veintinueve de mayo (día siguiente al en que surtió efectos la notificación) al once de junio del mismo año, excluyéndose los días uno, dos, ocho y nueve de junio, por ser sábados y domingos y por ello inhábiles en término de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mientras que el recurso de revisión fue interpuesto el día siete de junio del citado año, esto es cuatro días antes de que feneciera el término de diez días señalado por el citado artículo 86 de la Ley de Amparo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE LA UNIÓN
JUECES DE LA UNIÓN
SALA IV

TERCERO. La parte quejosa expuso los siguientes agravios:

"PRIMERO. - - - FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo causa **"el Considerando QUINTO de la sentencia recurrida en su parte que a la letra establece: - - - (Se transcribe). - - - DISPOSICIONES VIOLADAS.-** **"artículos 1° y 14 constitucionales y los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo. - - -** **"CONCEPTOS DEL AGRAVIO.-** En el escrito de mi **"representada de fecha 13 de Julio del año 2001,** **"mediante el cual demando el AMPARO Y** **"PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN,** **"dentro de la cual se precisaron como ACTOS** **"RECLAMADOS: - - - A).- Del Congreso de la Unión,** **"se reclamó: la aprobación y expedición del** **"Decreto que contiene la Ley de Ahorro y Crédito** **"Popular y derogación de diversas disposiciones**

"de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. - - - B).- Del Presidente de la República, se reclamó: la promulgación y la orden de publicación de la ley citada. - - - C).- Del Secretario de Gobernación del Ejecutivo Federal, se reclamó: el refrendo y firma de la ley citada. - - - D).- Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclamó: la publicación del decreto respectivo. - - - Reclamando como GARANTÍAS VIOLADAS: Las que otorgan y consagran los artículos 1°, 5°, 14, 16, séptimo párrafo del artículo 25 y 26 constitucionales. - - - En el mismo escrito mediante el cual mi representada solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión exhibió los siguientes medios de prueba; copia certificada de la acta de fecha 03 de Agosto de 1994, ratificada ante la fe del licenciado ABEL REYES CASTRO, Notario Público Adscrito de la Notaría N° 2, del Partido Judicial de Amealco, Qro., se hizo constar la constitución de la CAJA INDEPENDENCIA, S.C.L. SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE AHORRO Y PRESTAMO DE R. L. DE C.V., documento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el Folio Mercantil número 00002015/1 de fecha 31 de Octubre de 1995, hora 13:27:14; copia certificada ante Notario Público de la Cédula de Identificación



CORTE DE
NACIONAL
JUEZ DE
I. SALA

**"Fiscal de mi representada; copia certificada ante
 "Notario Público del Aviso de Inscripción Patronal
 "ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y
 "copia certificada ante Notario Público de la
 "Licencia Municipal de Funcionamiento de mi
 "representada. Pruebas que el C. JUEZ DE
 "DISTRITO no tomó en cuenta al momento de dictar
 "la resolución que mediante el presente ocurso se
 "recurre, a pesar de que tenía la obligación legal de
 "tomarlas en cuenta, por así imponérselo el artículo
 "78 de la Ley de Amparo en su segundo párrafo en
 el cual textualmente establece: (se transcribe);
 "SIENDO QUE AL EFECTO TENEMOS QUE CON
 "DICHAS PRUEBAS SE ACREDITÓ QUE: La
 "constitución de mi representada se realizó bajo el
 "marco jurídico de la Ley General de Sociedades
 "Cooperativas promulgada y publicada en el Diario
 "Oficial de la Federación el día 03 de Agosto de
 "1994, con la cual mi representada nace
 "jurídicamente como persona moral con la
 "denominación de CAJA INDEPENDENCIA, S.C.L.
 "SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE
 "AHORRO Y PRÉSTAMO DE R.L. DE C.V.,
 "legalmente constituida, PARA OPERAR POR
 "TIEMPO INDEFINIDO, CONTANDO DESDE ESE
 "MOMENTO EN QUE SE CONSTITUYÓ CON
 "PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO
 "PROPIOS; que la acta constitutiva fue inscrita en
 "el Registro Público de la Propiedad y de Comercio**

*"con lo cual se le dio publicidad a mi representada:
"que tal y como se desprende de la acta
"constitutiva obtuvo el permiso de la Secretaría de
"Relaciones Exteriores para utilizar dicha
"denominación, dándose de alta ante la Secretaría
"de Hacienda y Crédito Público como persona
"moral contribuyente para los fines y efectos
"fiscales conducentes; que se dio de alta ante el
"Instituto Mexicano del Seguro Social como parte
"patronal; y que obtuvo la licencia municipal de
"funcionamiento respectiva, con las cuales se
"acredita que mi representada ha cumplido y está
"cumpliendo con todos los requisitos exigidos por
"las diversas disposiciones legales para el
"funcionamiento lícito a la complementación del
"objeto para el cual fue constituida mi
"representada. Con lo cual mi representada
"adquirió a partir de su legal constitución derechos
"inherentes a su personalidad que pasaron a
"formar parte de su patrimonio de los cuales no
"puede ser privados mi representada sino mediante
"resolución judicial y bajo ciertos requisitos que en
"caso concreto no se han actualizado. Cuestiones
"que como ya se mencionó el C. JUEZ DE
"DISTRITO no tomó en cuenta al momento de dictar
"su resolución. - - - En la misma tesitura el C. JUEZ
"DE DISTRITO al dictar su resolución y al no tomar
"en cuenta las pruebas vertidas afirma sin ningún
"razonamiento lógico jurídico lo siguiente: (se*



TE DE
ACION
IDOS DE
SALA

"transcribe). - - - Siendo falso como lo afirma el C.
"JUEZ DE DISTRITO en la resolución recurrida que
"no se expresaron los conceptos de violación y mal
"interpreta y refiere que la ley nos obliga a cambiar
"el objeto social, lo cual no es cierto ya que nunca
"se reclamó lo anterior y si más sin embargo con
"dicha ley tildada de inconstitucional se priva a mi
"representada de continuar cumpliendo con su
"objeto para la cual fue creada jurídicamente,
"siendo que tampoco lo es como lo señala el C.
"JUEZ DE DISTRITO en el sentido de que no se
"señalaron los artículos con los cuales la ley
"tildada de inconstitucional se le está privando la
"existencia jurídica a mi representada, ya que el
"escrito inicial de la demanda de amparo en el
"punto seis no solamente se señalaran sino que se
"transcriben para su mejor identificación, contrario
"a lo afirmado por el C. JUEZ DE DISTRITO
"tenemos que mi representada acreditó la
"titularidad de sus derechos que forman parte de
"su patrimonio, que éstos ya los tenía previamente
"constituidos a la entrada en vigor de la ley tildada
"de inconstitucional, que mediante la citada ley y al
"aplicarse ésta, retroactivamente se le está
"privando de dichos derechos que forman parte de
"su patrimonio y que como consecuencia de ello se
"le está violando la garantía de irretroactividad
"prevista y sancionada en el primer párrafo del
"artículo 14 constitucional y no como lo menciona

*"el C. JUEZ DE DISTRITO en el sentido que para
"que a mi representada con dicha ley
"inconstitucional no se le esta privando de sus
"derechos ya constituidos con antelación, si no
"que simplemente para seguir utilizando su razón y
"poder seguir operando solamente tiene que
"conseguir una autorización y cumplir con los
"nuevos requisitos, luego entonces la pregunta es
"que acaso no ya cumplió con los requisitos
"legales de la ley bajo la cual se constituyó y tuvo
"vida jurídica, acaso la Ley General de Sociedades
"Cooperativas no tuvo el mismo proceso legislativo
"en su creación que la ley que se combate y se tilda
"de inconstitucional, que a caso la Ley General de
"Sociedades Cooperativas no es una ley
"reglamentaria de la constitución, luego entonces
"por qué a mi representada se le pretende aplicar
"retroactivamente la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular, por lo que son procedentes los agravios
"vertidos para el efecto de que se modifique la
"sentencia del primer conocimiento y se otorgue el
"amparo y protección de la Justicia de la Unión. - - -
"Sirviendo para robustecer lo afirmado me permito
"transcribir el siguiente criterio jurisprudencial
"mismo que fue vertido en el escrito inicial y el cual
"el C. JUEZ DE DISTRITO tampoco tomó en cuenta
"al momento de dictar la resolución combatida, que
"a la letra establece: - - - Novena Época. - - -
"Instancia: Pleno. - - - Fuente: Semanario Judicial*



RTE DE
NACION
UERDOS DE
SALA

"de la Federación y su Gaceta. - - - Tomo: VI,
"Noviembre de 1997. - - - Tesis: P./J. 87/97. - - -
"Página: 7. - - - 'IRRETROACTIVIDAD DE LAS
"LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA
"TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA'.
"(Se transcribe). - - - SEGUNDO. - - - FUENTE DEL
"AGRAVIO.- Lo causa el Considerando QUINTO de
"la sentencia recurrida en su parte que a la letra
"establece: - - - (Se transcribe). - - -
"DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 1°, 5° y 14
"constitucionales y los artículos 76, 77, 78 y 79 de
"la Ley de Amparo. - - - CONCEPTOS DEL
"AGRAVIO.- Contrario a lo afirmado por el C. JUEZ
"DE DISTRITO se dice que la aprobación,
"expedición, promulgación y publicación del
"decreto que contiene la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular y derogación de diversas disposiciones
"de la Ley General de Organizaciones y Actividades
"Auxiliares del Crédito y de la Ley General de
"Sociedades Cooperativas, conculca la garantía
"prevista y sancionada en el artículo 5°
"constitucional a mi representada y que a la letra
"señala en la parte conducente: (se transcribe). - - -
"En el caso concreto, se está privando a mi
"representada vía la ley combatida de continuar
"cumpliendo con el objeto para el cual fue creada.
"Sin que en la especie se haya acreditado en forma
"satisfactoria que mi representada haya atacado
"derechos de tercero y más aún, que haya ofendido

*"los derechos de la sociedad; que al contrario, es
"precisamente la sociedad quien ha dado vida a la
"institución que represento. - - - Si bien señala el
"artículo 2° de la combatida ley de manera textual
"establece lo siguiente: (se transcribe). También lo
"es que implícitamente se reconoce a mí
"representada el carácter de Sociedad Cooperativa
"de Ahorro y Préstamo con el que se ha
"ostentando; incurriendo la combatida ley en
"severas contradicciones al nulificar
"posteriormente dicho carácter de mí representada
"en el numeral 6 que a la letra dice: (se
"transcribe). - - - Con lo cual en el caso concreto se
"ve coartada la libertad de mí representada para
"continuar cumpliendo con la actividad plasmada
"en su objeto social para la cual fue creada y que
"de acuerdo a dicho numeral transcrito es viable
"dicha limitación por el solo hecho de expresar
"dichas ideas cuando en el caso concreto mi
"representada las ha practicado de acuerdo al
"marco legal conforme a lo cual se constituyó, ya
"que sin mediar juicio alguno en el cual haya sido y
"oído y vencido se le esta privando de un derecho
"que ya tenía reconocido tan es así que la
"denominación de SOCIEDAD COOPERATIVA DE
"AHORRO Y PRÉSTAMO la obtuvo desde un
"principio en base a la normatividad con la cual fue
"creada y se ha venido rigiendo y de que obtuvo de
"la Secretaría de Relaciones Exteriores la*



**"autorización para la utilización de la razón social
"de mi representada desde el mismo momento en
"que nació jurídicamente es decir desde su acta
"constitutiva, siendo además que con ello mi
"representada no solamente se le está
"condicionando que para el caso de que para
"continuar funcionando y desarrollando su
"actividad tiene que tener una autorización para el
"caso de ser aprobado pueda continuar con su
"actividad que ya venía realizando lícitamente al
"cumplir no solamente con todos y cada uno de los
"requisitos de la normatividad conforme a la cual
"fue constituida sino con todos y cada uno de los
"requisitos que diversas normatividades le
"impusieron, para que conforme a la ley combatida
"ya no pueda ni siquiera utilizar parte de su
"denominación legal, si no que también para los
"efectos de poder continuar con la actividad que le
"impone su objeto social la cual ya venía realizando
"lícitamente y en base a una normatividad que es la
"que se combate tiene que obtener una
"autorización para poder operar en algo que
"concretamente ya venía operando como se ha
"dicho en forma lícita y en base a la Ley General de
"Sociedades Cooperativas. De lo que se desprende
"que efectivamente a mi representada se le están
"conculcando sus garantías individuales entre
"otras la de libertad de trabajo prevista y
"sancionada en el artículo 5° constitucional y no**

*"como lo afirma el C. JUEZ DE DISTRITO, sin
"fundamento alguno en el sentido que no se le esta
"privando de poder continuar operando y de
"cumplir con su objeto social para el cual fue
"creado, si no que lo único que tiene que cumplir
"es con las nuevas disposiciones y obtener la
"autorización para poder operar, luego entonces si
"se le conculcan sus garantías individuales
"previstas y sancionadas en los artículos 1°, 5° y 14
"constitucionales que amparan y protegen a mi
"representada ya que como se ha venido
"argumentado mi representada conforme a la ley
"que fue constituida y obtuvo la autorización para
"operar lícitamente, con la aplicación retroactiva de
"la ley combatida se le está privando de seguir
"operando o bien obligando a obtener una nueva
"autorización y en caso de no realizarlo su
"actividad que viene realizando lícitamente se
"convertirá en ilícita, sin tener por que obtener una
"nueva autorización cuando ya la tiene, faltando
"únicamente que se diga borrón y cuenta nueva
"para que las cosas sean mejores, no importando
"con ello que se supriman derechos que ya se
"tenían previamente constituidos, ya que
"solamente se tiene que cumplir con los nuevos
"requisitos, lo que nos llevaría a pensar que los
"requisitos con los cuales ya cumplió mi
"representada para poder operar y de esta manera
"poder cumplir con su objeto, no fueron o no son*



"válidos por una decisión unilateral de quienes
 "detentan el poder. - - - TERCERO. - - - FUENTE
 "DEL AGRAVIO.- Lo causa el considerando SEXTO
 "de la sentencia recurrida en su parte que a la letra
 "establece: - - - (Se transcribe). - - -
 "DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 1°, 5°, 14,
 "16 y 133 constitucionales y los artículos 76, 77, 78
 "y 79 de la Ley de Amparo. - - - CONCEPTOS DEL
 "AGRAVIO.- Contrario a lo afirmado por el C. JUEZ
 "DE DISTRITO, se dice que la aprobación,
 "expedición, promulgación y publicación del
 "decreto que contiene la Ley de Ahorro y Crédito
 "Popular y derogación de diversas disposiciones
 "de la Ley General de Organizaciones y Actividades
 "Auxiliares del Crédito y de la Ley General de
 "Sociedades Cooperativas, conculca la garantía
 "prevista y sancionada en el artículo 14
 "constitucional en su párrafo segundo y que a la
 "letra señala: (se transcribe). Ello es así, por el
 "simple hecho, de que con la aprobación
 "promulgación y publicación y entrada en vigor de
 "la combatida ley se priva de sus derechos ya
 "adquiridos con anterioridad, a mí representada,
 "toda vez que sin mediar juicio alguno se aprobó la
 "combatida ley dejando en estado de indefensión a
 "mi representada, afectando con ello las
 "posesiones y derechos, que de suyo se generan
 "de manera intrínseca por la actividad que lleva a
 "cabo mi representada. - - - Ya que si bien es cierto

"como lo afirma el C. JUEZ DE DISTRITO en la
"resolución combatida en el sentido de que tenga
"la obligación el órgano legislativo de oír de
"manera previa al gobernado para poder promulgar
"y publicar una ley, al no expresarlo así el artículo
"14 constitucional, y ser una función exclusiva de
"dicho órgano, pero también es cierto que al
"aplicarse retroactivamente dicha ley a mi
"representada se le conculcan dichas garantías
"constitucionales, si tomamos en cuenta el
"contenido de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
"en los siguientes artículos que se transcriben: - - -
"‘Artículo 2º’. (Se transcribe). - - - ‘Artículo 6º’. (Se
"transcribe). - - - ‘Artículo 7º’. (Se transcribe). - - -
"‘Artículo 9º’. (Se transcribe). - - - ‘Artículo 138’. (Se
"transcribe). - - - ‘ARTÍCULO TERCERO’. (Se
"transcribe). - - - ‘ARTÍCULO 26’. (Se transcribe). - -
"- ‘ARTÍCULO 33’. (Se transcribe). - - - Artículos
"transitorios: - - - ‘PRIMERO’. (Se transcribe). - - -
"‘SEGUNDO’. (Se transcribe). - - - ‘TERCERO’. (Se
"transcribe). - - - Como se puede apreciar de los
"artículos antes transcritos de la ley tildada de
"inconstitucional si se le está privando ilegalmente
"de derechos que ya tenía previamente
"constituidos y no como lo manifiesta el C. JUEZ
"DE DISTRITO en el sentido que a mi representada
"no se le está privando de que se dedique a la
"actividad que desempeña con anterioridad a la
"promulgación de la ley que combate, sino que



"simplemente ahora deberá observar las
"disposiciones que establece la Ley de Ahorro y
"Crédito Popular, pasando por alto que mi
"representada fue legalmente constituida bajo el
"marco jurídico de la Ley General de Sociedades
"Cooperativas promulgada y publicada en el Diario
"Oficial de la Federación el día 03 de Agosto de
"1994, con la cual mi representada ^{se} ~~nace~~
"jurídicamente como persona moral ^{con} la
"denominación de CAJA INDEPENDENCIA S.C.L.
"SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE
"AHORRO Y PRÉSTAMO R.L. DE C.V., legalmente
"constituida, PARA OPERAR ^{por} TIEMPO
"INDEFINIDO, CONTANDO DESDE ESE MOMENTO
"EN QUE SE CONSTITUYO ^{con} PERSONALIDAD
"JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, obteniendo el
"permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
"para utilizar dicha denominación, se da de alta
"ante la Secretaría ^{de} Hacienda y Crédito Público
"como persona moral contribuyente para los fines
"y efectos fiscales conducentes, así como también
"se dio ^{de} alta ante el Instituto Mexicano del
"Seguro Social como parte patronal, obteniendo
"también la licencia municipal de funcionamiento
"respectiva, ha cumplido con todos los requisitos
"exigidos por las diversas disposiciones legales
"para el funcionamiento lícito a la cumplimentación
"del objeto para el cual fue constituida mi
"representada. Con lo cual mi representada



LA CORTE DE
DE LA NACIÓN.
DE ACUERDO DE
IMERA S.A.L.

*"adquirió a partir de su legal constitución derechos
"inherentes a su personalidad que pasaron a
"formar parte de su patrimonio de los cuales no
"puede ser privado mi representada con la
"aplicación de dicha ley concretamente el de poder
"y continuar existiendo regida por un marco
"jurídico bajo el cual fue creada y obtuvo
"personalidad y patrimonio propio y de que para la
"utilización de su nombre obtuvo permiso por
"tiempo indefinido de la Secretaría de Relaciones
"Exteriores para denominarse tal y como ya ha
"quedado expresado y de que la actividad que
"realiza en base a su objeto social para la cual fue
"creada deja de existir única y exclusivamente por
"que las autoridades señaladas como
"responsables, unilateralmente y sin que a mi
"representada se le haya respetado su garantía de
"audiencia y de legalidad previstos y sancionados
"en los Artículos 14 y 16 constitucionales reforman
"el artículo 26 de la Ley General de Sociedades
"Cooperativas, para quedar finalmente como a
"continuación se transcribe: 'Artículo 26'. (Se
"transcribe), cuando su redacción original antes de
"dicha reforma textualmente señalaba lo siguiente:
"'Artículo 26'. (Se transcribe), con lo cual puede
"apreciarse que efectivamente aunque a mi
"representada se constituyó legalmente en base a
"la ley antes citada y su objeto social lo es
"preponderantemente la captación de recursos*



"entre sus socios para su colocación entre los
"mismos mediante el otorgamiento de préstamos
"tal y como se desprende del capítulo de
"antecedentes y que con la reforma del citado
"artículo mi representada ya no podrá dedicarse a
"dicha actividad única y exclusivamente porque las
"autoridades responsables así lo decidieron
"unilateralmente sin respetar su derecho de
"audiencia y de legalidad; más aún por si lo
"anterior no fuera suficiente resulta que mi
"representada en base a la Ley General de
"Sociedades Cooperativas marco legal bajo el cual
"fue constituida y bajo la cual se regían sus
"actividades que se desprenden de su objeto social
"y que venía desarrollando lícitamente cumpliendo
"con todos y cada una de las normatividades
"aplicables, resulta que conforme a lo dispuesto
"por la ley tildada de inconstitucional, no
"solamente va a tener que realizar los trámites
"necesarios para poder continuar operando algo
"que ya le estaba autorizado por la Ley General de
"Sociedades Cooperativas y de que para el caso de
"que no obtenga dicha autorización tendrá que
"dejar de realizar sus operaciones bajo la pena de
"que si no deja de realizar sus operaciones luego
"entonces se ubicarán en los supuestos de
"infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito
"Popular en su capítulo respectivo, con lo cual las
"autoridades responsables unilateralmente

"convierten la actividad que mi representada viene
"realizando lícitamente y de que de continuarla
"realizando sin obtener una autorización dicha
"actividad la convierten en ilícita con el riesgo
"inclusive que sus principales funcionarios se
"hagan acreedores a penas privativas de libertad,
"con lo cual y violando las garantías de audiencia y
"de legalidad de mi representada previstas y
"sancionadas en los artículos 14 y 16
"constitucionales, ya que el artículo 14
"constitucional determina que los actos de
"privación a que se refiere deben hacerse conforme
"a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y
"el artículo 16 de la Carta Magna determina que los
"actos de molestia deben de ser fundados y
"motivados, con lo que nos encontramos que la
"disposición legal tildada de inconstitucional es
"violatoria los preceptos citados de nuestra Carta
"Magna, y no como lo manifiesta el C. JUEZ DE
"DISTRITO, que con dicha ley no se transgrede a mi
"representada las garantías de audiencia y
"legalidad, ya que el artículo 133 constitucional el
"cual establece una supremacía de las normas
"constitucionales frente a las normas legales
"secundarias; por lo que a través de los actos
"reclamados en este juicio de amparo, mediante
"una disposición legal secundaria combatida en la
"presente demanda, se establecen profundas
"restricciones a las garantías de AUDIENCIA y de



ORTE DE
NACION.
UERDOS DE
SALA.

"LEGALIDAD, trastocando el orden jurídico que le
"da como debe de ser, mayor valor a las normas
"constitucionales, ya que como en la especie
"acontece con la promulgación y publicación de ley
"tildada de inconstitucional y con su aplicación
"retroactiva que contiene intrínsecamente en sus
"disposiciones mismas que en líneas anteriores se
"citan se priva a mi representada de derechos que
"ya tenía constituidos y reconocidos que forman
"parte de su patrimonio de los cuales se le están
"privando de forma unilateral y por demás arbitraria
"por parte de las autoridades señaladas como
"responsables ya que mi representada está siendo
"privada de su libertad en cuanto a su actividad
"lícita que ha venido desarrollando y de sus
"derecho ya constituidos con anterioridad a dicha
"ley y que por lo tanto a mi representada no se le
"puede aplicar retroactivamente dicha ley porque
"luego entonces se le conculcan dichas garantías y
"se priva de sus derechos que forman parte de su
"patrimonio. - - - Siendo además el caso que el C.
"JUEZ DE DISTRITO, no tomó en cuenta los
"siguientes criterios jurisprudenciales, los cuales
"robustecen los argumentos antes vertidos, los
"cuales humildemente me permito citar a efecto de
"que sean tomados en consideración al momento
"de resolver en definitiva sobre el presente recurso.
"- - - Novena Época. - - - Instancia: SEXTO
"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL

**"PRIMER CIRCUITO. - - - Fuente: Semanario
"Judicial de la Federación y su Gaceta. - - - Tomo:
"IV, Octubre de 1996. - - - Tesis: I.6o.C.28 K. - - -
"Página: 547. - - - 'GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO
"SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE
"CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO
"CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR
"ÉSTOS'. (Se transcribe). - - - Novena Época. - - -
"Instancia: Pleno. - - - Fuente: Semanario Judicial
"de la Federación y su Gaceta. - - - Tomo: IV, Julio
"de 1996. - - - Tesis: P./J. 40/96. - - - Página: 5. - - -
"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA.
"ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN'. (Se
"transcribe). - - - Novena Época. - - - Instancia:
"Pleno. - - - Fuente: Semanario Judicial de la
"Federación y su Gaceta. - - - Tomo: II, Diciembre
"de 1995. - - - Tesis: P./J. 47/95. - - - Página: 133.
"- - - 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL
"PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
"UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA
"AL ACTO PRIVATIVO'. (Se transcribe). - - - Octava
"Época. - - - Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL
"COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. - - - Fuente:
"Semanario Judicial de la Federación. - - - Tomo:
"XIII, Junio de 1994. - - - Página: 529. - - -
"AUDIENCIA GARANTÍA. DEBE RESPETARSE
"AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA
"RESOLUCIÓN, NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO
"PARA TAL EFECTO'. (Se transcribe). - - - Octava**



**"Época. - - - Instancia: PRIMER TRIBUNAL
"COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
"- - - Fuente: Semanario Judicial de la
"Federación. - - - Tomo: X, Noviembre de 1992. - - -
"Página: 244. - - - 'CONSTITUCIÓN, ATAQUES
"DIRECTOS A LA. CUANDO NO EXISTEN'. (Se
"transcribe)". (Fojas 3 a 19 del tomo en que se actúa).**

CUARTO. Son infundados los conceptos de agravios hechos valer por la empresa quejosa y hoy recurrente.

En el primero de ello, la impetrante sostiene, substancialmente, que la Juez de Distrito no tomó en cuenta al dictar la sentencia recurrida las pruebas documentales aportadas consistentes en copias certificadas de la escritura pública de constitución de la sociedad quejosa, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de la cédula de identificación fiscal, del aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de la licencia municipal de funcionamiento, pues con ellas se acreditó que la sociedad quejosa se constituyó bajo el marco jurídico de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, como sociedad cooperativa de consumo de ahorro y préstamo para operar por tiempo indefinido y con personalidad jurídica y patrimonio propios, obteniéndose los permisos correspondientes para su legal funcionamiento, adquiriendo con ello derechos inherentes a su personalidad que forman parte de su patrimonio, de los cuales no puede ser privada sino mediante resolución

judicial y cumpliéndose las garantías de audiencia y legalidad, razón por la cual la Ley de Ahorro y Crédito Popular al condicionar el funcionamiento y denominación de la quejosa como una sociedad de ahorro y préstamo a la obtención de una autorización de una comisión, vía dictamen de una federación, quebranta las garantías de audiencia y legalidad, así como el principio de irretroactividad al violentarse los derechos adquiridos por la quejosa bajo la normatividad a la que se sujetó su constitución, invocándose al respecto la jurisprudencia intitulada: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA".

Asimismo, en el tercer agravio, la recurrente también aduce, en síntesis, que la ley reclamada es violatoria del artículo 14 constitucional, porque si bien es cierto que, como lo afirma la Juez de Distrito, el órgano legislativo no tiene la obligación de oír de manera previa a la expedición de una ley al gobernado, también lo es que la Ley de Ahorro y Crédito Popular en sus artículos 2º, 6º, 7º, 9º y 138, así como los artículos 26 y 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas reformados y los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto reclamado, son retroactivos al privar ilegalmente a la quejosa de los derechos que tenía adquiridos al haberse constituido y haber cumplido con todos los requisitos exigidos para su legal funcionamiento conforme a la legislación anterior, sin respetársele las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto tendrá que realizar los nuevos trámites establecidos para poder continuar operando algo que ya le estaba



autorizado por la Ley General de Sociedades Cooperativas, bajo la pena de que de continuar con sus operaciones sin obtener la autorización correspondiente, se ubicará en los supuestos de infracción previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Sostiene que, por tanto, se actualiza la transgresión a los artículos 14, 16 y 133 constitucionales, en tanto el primero de dichos preceptos establece que los actos de privación deben hacerse conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, el segundo, que los actos de molestia deben estar fundados y motivados y el último precepto establece la supremacía de las normas constitucionales frente a las normas legales secundarias. Se invocan como aplicables las tesis intituladas: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ÉSTOS" "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN", "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", "AUDIENCIA, GARANTÍA. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO" y "CONSTITUCIÓN, ATAQUES DIRECTOS A LA. CUÁNDO NO EXISTEN".

Contrariamente a lo alegado por la recurrente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, como correctamente lo determinó el Juez de Distrito a quo, en la sentencia recurrida, el decreto reclamado por el que se expide la

Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil uno, no viola la garantía de irretroactividad al establecer una nueva regulación jurídica para las sociedades de ahorro y préstamo y, concretamente, al sujetar al nuevo régimen jurídico a las sociedades que se hubieren constituido con anterioridad a su vigencia.

En efecto, el derecho surge, en gran medida, para eliminar la violencia y la arbitrariedad en las relaciones sociales; como una respuesta a la "vindicta privada", en que prevalecía la ley del más fuerte.

En tales condiciones, las normas jurídicas, de carácter general, que pueden aplicarse a un sinnúmero de situaciones particulares, constituyen un marco de referencia que permite a los gobernados conocer cuáles son los efectos de su conducta; por lo que, sería contrario al espíritu del orden jurídico que los derechos y obligaciones creados bajo el amparo de ciertas normas sean desconocidos por disposiciones posteriores.

Al respecto, resultan ilustrativas las ideas de Luis Legaz y Lacambra, quien expresa en torno al tema en cuestión:

***"...La retroactividad de la ley sería aquella
"cualidad de las leyes por la cual éstas someterían
"a nuevo examen las condiciones de validez de un***



**"acto jurídico regulado por la legislación anterior,
"modificando o suprimiendo sus consecuencias
"jurídicas: se trataría pues, de una verdadera vuelta
"atrás de la ley".**

**(Filosofía del Derecho, Ed. Bosch, Barcelona, 3ª.
ed., p. 645).**

Por su parte, Benjamín Constant se refirió a la retroactividad de la ley en los términos siguientes:

**...La retroactividad de las leyes es el mayor
"atentado que la ley puede cometer; es el
"desgarramiento del pacto social, la anulación de
"las condiciones en virtud de las cuales la sociedad
"tiene derecho a exigir obediencia al individuo; por
"ella le roba las garantías que le asegura en cambio
"de esa obediencia, que es un sacrificio. La
"retroactividad arrebatada a la ley su carácter; la ley
"que tiene efectos retroactivos no es una ley".**

(citado por Luis Legaz y Lacambra, op. cit.).

En el Derecho Constitucional Mexicano, la garantía de irretroactividad de la ley tiene su antecedente inmediato en el artículo 14 de la Constitución de 1857 que establecía:

"No se podrá expedir ninguna ley retroactiva..."

Por su parte, la Constitución de 1917, respecto a la garantía de la irretroactividad de la ley, establece en su artículo 14, primer párrafo, lo siguiente:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

El artículo 14 constitucional, vigente a partir de 1917, cambió la redacción que tenía el precepto relativo de la Constitución anterior y sustituyó la expresión “no se podrá expedir ninguna ley retroactiva” por “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, situación que provocó un problema de interpretación, a saber, si la prohibición contenida en el artículo 14 constitucional incluía al órgano legislativo o solamente a las autoridades que tuvieran a su cargo la aplicación de la ley.

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de irretroactividad de la ley no limitaba al Poder Constituyente, que sí se encuentra facultado para expedir leyes retroactivas, siempre que existan razones políticas y sociales, de interés general, que exijan dicha forma de regulación. El criterio anterior se encuentra expuesto en la siguiente tesis de jurisprudencia:

“Quinta Época

“Instancia: Pleno

“Fuente: Apéndice de 1995

“Tomo: I, Parte SCJN

**"Tesis: 302****"Página: 282**

**"RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS
"CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES
"POR. Las leyes retroactivas, o las dicta el
"legislador común o las expide el Constituyente al
"establecer los preceptos del Código Político. En el
"primer caso, no se les podrá dar efecto
"retroactivo, en perjuicio de alguien, porque lo
"prohíbe la Constitución; en el segundo, deberán
"aplicarse retroactivamente, a pesar del artículo 14
"constitucional, y sin que ello importe violación de
"garantía individual alguna. En la aplicación de los
"preceptos constitucionales hay que procurar
"armonizarlos, y si resultan unos en oposición con
"otros, hay que considerar los especiales como
"excepción de aquéllos que establecen principios o
"reglas generales. El legislador constituyente, en
"uso de sus facultades amplísimas, pudo, por altas
"razones políticas, sociales o de interés general,
"establecer casos de excepción al principio de no
"retroactividad, y cuando así haya procedido, tales
"preceptos deberán aplicarse retroactivamente.
"Para que una ley sea retroactiva, se requiere que
"obre sobre el pasado y que lesione derechos
"adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y
"esta última circunstancia es esencial.**



ORTE DE
NACION
FUERDOS
SALA

*"Tomo IX, pág. 432. Amparo en revisión. The Texas
"Company of Mexico, S. A. 30 de agosto de 1921.
"Unanimidad de once votos.*

*"Amparo en revisión 667/20. International
"Petroleum Company. 8 de mayo de 1922. Mayoría
"de nueve votos.*

*"Amparo en revisión 7/19. International Petroleum
"Company. 10 de mayo de 1922. Mayoría de nueve
"votos.*

*"Amparo en revisión 437/20. Tamiahua Petroleum
"Company. 12 de mayo de 1922. Mayoría de nueve
"votos.*

*"Amparo en revisión 452/20. Tamiahua Petroleum
"Company. 12 de mayo de 1922. Mayoría de nueve
"votos.*

"NOTA:

*"En los Apéndices al Semanario Judicial de la
"Federación correspondiente a los Tomos de
"Quinta Época, y en los Apéndices 1917-1954, 1917-
"1965 y 1917-1975, la tesis aparece publicada con el
"rubro: 'RETROACTIVIDAD DE LA LEY'.*



"En el último precedente la página del Tomo X se publica como 1190 en los diversos Apéndices del 'Semanario Judicial de la Federación'".

Dicho criterio, que reconoce la potestad del Poder Constituyente de expedir leyes retroactivas, cuando así lo exijan las circunstancias de interés general, se explica en tanto que dicho Órgano Legislativo, al reformar un precepto de la propia Constitución no podría incurrir en violación de ésta, ya que todos los preceptos de la Carta Magna son de la misma jerarquía. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis siguiente:



"Octava Época

"Instancia: Pleno

ORTE DE
A NACIÓN
GUERDOS DE
LA SALA

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990

"Tesis: XXXIX/90

"Página: 17

**"CONSTITUCIÓN, TODAS SUS NORMAS TIENEN
"LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS
"PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. De
"conformidad con el artículo 133 de la Constitución
"de la República todos sus preceptos son de igual
"jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los
"demás, por lo que no puede aceptarse que
"algunas de sus normas no deban observarse por
"ser contrarias a lo dispuesto por otras. De ahí que
"ninguna de sus disposiciones pueda ser**

*"considerada inconstitucional. Por otro lado, la
"Constitución únicamente puede ser modificada o
"adicionada de acuerdo con los procedimientos
"que ella misma establece.*

*"Amparo en revisión 2083/88. Carlos Mejía Melgoza.
"7 de febrero de 1990. Unanimidad de veinte votos
"de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña
"Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón
"León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón
"Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán,
"Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González
"Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores,
"García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero,
"Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez.
"Ausente: Rocha Díaz. Ponente: Juan Díaz Romero.
"Secretario: Carlos Ronzon Sevilla.*

*"Amparo en revisión 8165/62. Salvador Piña
"Mendoza. 22 de marzo de 1972. Unanimidad de
"dieciséis votos de los señores ministros:
"Rebolledo, Jiménez Castro, Rivera Silva, Burguete,
"Huitrón, Rojina Villegas, Saracho Álvarez, Martínez
"Ulloa, Solís López, Canedo, Salmorán de Tamayo,
"Yáñez, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra,
"Aguilar Álvarez y Presidente Guzmán Neyra.
"Ausentes: Euquerio Guerrero, Mariano Azuela,
"Mariano Ramírez Vázquez, Carlos del Río
"Rodríguez y Jorge Iñárritu. Ponente: Enrique*



**"Martínez Ulloa. Secretario: Guillermo Baltazar
"Alvear.**

**"Séptima Época, Volumen 39, Primera Parte, Página
"22.**

**"Tesis XXXIX/90, aprobada por el Tribunal en Pleno
"en sesión privada celebrada el jueves diecisiete
"de mayo de mil novecientos noventa. Unanimidad
"de dieciocho votos de los señores ministros:
"Presidente en funciones González Martínez
"Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón,
"Alba Leyva, Castañón León, López Contreras,
"Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez
"Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor,
"Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García
"Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y
"Schmill Ordóñez. Ausentes: Presidente del Río
"Rodríguez, de Silva Nava y Fernández Doblado.
"México, Distrito Federal a diecisiete de mayo de
"1990".**



ORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
RA SAA

Una vez excluido el Poder Constituyente del ámbito de obligatoriedad del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia estimó que, dada la nueva redacción que la Constitución de 1917 le dio a tal precepto, sustituyendo la frase "no se podrá expedir ninguna ley retroactiva" por "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", la llamada garantía de irretroactividad de la ley tampoco vinculaba al Legislador

Ordinario, constriñendo únicamente a las autoridades que tuvieran la encomienda de aplicar las leyes. La tesis que resultó con motivo de dicha interpretación es la siguiente:

"Quinta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XXVII

"Página: 1015

"RETROACTIVIDAD. La Constitución de 1857 establecía que no se podía expedir ninguna ley retroactiva, en tanto que la de 1917, en su artículo 14, se limita a expresar que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna; lo cual viene a significar que la Constitución anterior, prohibía al legislador dictar disposiciones que rigieran actos ya sometidos al imperio de leyes anteriores y la Constitución de 1917, en cambio, no desconoce la facultad del legislador para dictar leyes que en sí mismas lleven efectos retroactivos, cuando así lo exija el bien social, y tiende únicamente a impedir que las autoridades apliquen las leyes con efecto retroactivo.

"Amparo administrativo en revisión 1074/23. Banco Internacional e Hipotecario de México. 15 de octubre de 1929. Unanimidad de cuatro votos.



"Ausente: Arturo Cisneros Canto. Relator: Jesús Guzmán Vaca".

El criterio anterior, que circunscribía la obligatoriedad del artículo 14 constitucional a las autoridades que llevaran a cabo la aplicación de la ley, excluyendo expresamente al órgano legislativo, fue modificado por la propia Suprema Corte de Justicia, para establecer que la garantía de irretroactividad de la ley protegía a los gobernados tanto en contra de las autoridades legislativas como de aquéllas que debían aplicar la ley, sustentando el siguiente criterio:

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XXVI

"Página: 543

"RETROACTIVIDAD: La jurisprudencia adoptada por la Corte, poco después de promulgada la Constitución, sobre que el artículo 14 de ésta, no reza con el legislador, sino que se dirige a los Jueces y a las autoridades encargadas de aplicar las leyes o de su ejecución, ha sido sustituida por la de que la verdadera interpretación de ese artículo, es la de que procede el amparo no sólo contra los actos de las autoridades que violen las garantías individuales, sino también contra las leyes, cuando son violadas de las mismas

***"garantías, tienen el carácter de aplicación
"inmediata y lesionan derechos adquiridos; pues
"las palabras del Constituyente no pueden dar
"lugar a distingos que no están en el texto del
"artículo 14 citado, que previene de una manera
"absoluta, que a ninguna ley se le dará efecto
"retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de
"la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la
"ley por sí misma, produce dicho efecto, desde el
"momento de su promulgación, pues resultaría
"ilógico admitir que el amparo procede contra las
"leyes y negarlo cuando se demuestra que los
"preceptos de ésta, automáticamente vuelven
"sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos***

***"Amparo civil en revisión 1372/28. Robles Carlos.
"17 de mayo de 1929. Unanimidad de cinco votos.
"La publicación no menciona el nombre del
"ponente".***

De conformidad con los criterios expuestos, actualmente se reconoce que la garantía de irretroactividad, consagrada en el artículo 14 constitucional, protege al gobernado tanto de la ley misma, a partir de que inicia su vigencia, como de su aplicación, es decir, constriñe al órgano legislativo a que no expida leyes que, en sí mismas, resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no apliquen las leyes en forma retroactiva.



Precisado lo anterior, debe tenerse presente que esta Suprema Corte de Justicia ha establecido, en relación con el tema en cuestión, la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: VI, Noviembre de 1997

"Tesis: P./J. 87/97

"Página: 7



CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU

"DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE

"LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a

"la citada teoría, para determinar si una ley cumple

"con la garantía de irretroactividad prevista en el

"primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe

"precisarse que toda norma jurídica contiene un

"supuesto y una consecuencia, de suerte que si

"aquél se realiza, ésta debe producirse,

"generándose, así, los derechos y obligaciones

"correspondientes y, con ello, los destinatarios de

"la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos

"y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la

"consecuencia no siempre se generan de modo

"inmediato, pues puede suceder que su realización

"ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece,

"por lo general, cuando el supuesto y la

*"consecuencia son actos complejos, compuestos
"por diversos actos parciales. De esta forma, para
"resolver sobre la retroactividad o irretroactividad
"de una disposición jurídica, es fundamental
"determinar las hipótesis que pueden presentarse
"en relación con el tiempo en que se realicen los
"componentes de la norma jurídica. Al respecto
"cabe señalar que, generalmente y en principio,
"pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando
"durante la vigencia de una norma jurídica se
"actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la
"consecuencia establecidos en ella. En este caso,
"ninguna disposición legal posterior podrá variar,
"suprimir o modificar aquel supuesto o esa
"consecuencia sin violar la garantía de
"irretroactividad, atento que fue antes de la
"vigencia de la nueva norma cuando se realizaron
"los componentes de la norma sustituida. 2. El
"caso en que la norma jurídica establece un
"supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si
"dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el
"supuesto y alguna o algunas de las
"consecuencias, pero no todas, ninguna norma
"posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin
"ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica
"contempla un supuesto complejo, integrado por
"diversos actos parciales sucesivos y una
"consecuencia. En este caso, la norma posterior no
"podrá modificar los actos del supuesto que se*



"haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
RA SALA

"Amparo en revisión 2013/88. Rolando Bosquez Jasso. 16 de agosto de 1989. Mayoría de diecinueve votos. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretario: Juan Manuel Martínez Martínez.

"Amparo en revisión 278/95. Amada Alvarado González y otros. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.

"Amparo en revisión 337/95. María del Socorro Ceseñas Chapa y otros. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente

**"Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela
"Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.**

**"Amparo en revisión 211/96. Microelectrónica, S.A.
"27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos.
"Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
"José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo
"López Cruz.**

**"Amparo en revisión 1219/96. Rosa María Gutiérrez
"Pando. 14 de agosto de 1997. Unanimidad de diez
"votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga
"María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía
"Piña Hernández.**

**"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
"el tres de noviembre en curso, aprobó, con el
"número 87/1997, la tesis jurisprudencial que
"antecede. México, Distrito Federal, a tres de
"noviembre de mil novecientos noventa y siete".**

A la luz de la teoría de los componentes de la norma jurídica, adoptada por este Tribunal, según la primera de las hipótesis contenidas en la tesis jurisprudencial que antecede, cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá modificarlos o suprimirlos, so pena de violar la garantía de irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 14 constitucional. Por el contrario,



si durante la vigencia de una norma jurídica, como ocurre en el caso, se realizaron el supuesto y las consecuencias en ella consignadas, resulta claro que una ley posterior, no podrá, volviendo al pasado, modificar o suprimir al uno o a la otra, pero sí podrá regular, sin ser retroactiva, nuevos supuestos y las consecuencias de los mismos, así como establecer hacia el futuro una nueva regulación respecto de los destinatarios de la ley vigente que se habían encontrado regidos por la Ley abrogada.

De las consideraciones y tesis transcritas derivan las siguientes determinaciones de este Órgano Colegiado:

a) La garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional protege al gobernado tanto de la ley misma, a partir de que inicia su vigencia, como de su aplicación, es decir, constriñe al órgano legislativo a que no expida leyes que, en sí mismas, resulten retroactivas, y a las autoridades ejecutoras a que no apliquen las leyes en forma retroactiva.

b) La garantía de irretroactividad que la ley debe respetar, conforme a la teoría de los componentes de la norma, adoptada por la Suprema Corte de Justicia, implica que cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá modificarlos o suprimirlos, pero sí podrá regular, sin ser retroactiva, nuevos supuestos y las consecuencias de los mismos, así como establecer hacia el futuro

una nueva regulación respecto de los destinatarios de la ley vigente que se habían encontrado regidos por la ley abrogada.

c) La garantía de irretroactividad, conforme a la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, también reconocida por la Suprema Corte de Justicia, significa que el derecho adquirido, que se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, no puede afectarse ni por voluntad de quienes intervinieron en el acto ni por disposición legal en contrario, a diferencia de la expectativa de derecho, que se traduce en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

Precisado lo anterior, es pertinente destacar los antecedentes, naturaleza y definición de las cajas de ahorro.

Para la doctrina, las cajas de ahorro corresponden a aquellas asociaciones constituidas por trabajadores o empleados de un centro de trabajo que, utilizando las aportaciones económicas de éstos, otorgan créditos o préstamos a los propios trabajadores con tasas de interés reducidas.

Las primeras cajas de ahorro datan de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y aparecen originalmente en Alemania, trasladándose posteriormente a Gran Bretaña y Francia.

Podemos señalar que la idea que subyace a su formación es la del ahorro, entendido como una forma de asegurar la



tranquilidad económica futura privándose de lo superfluo en el presente; por extensión se denomina ahorro a la suma de recursos obtenidos a través de este mecanismo consistente en reservar una parte del ingreso y acumularla durante un cierto período.

Dicho de otra manera, la participación en una caja de ahorro supone que el trabajador se desprende de una parte de su salario y lo aporta a un fondo común que le permite obtener crédito barato, o bien, recibir al final del período determinado el dinero que aportó, incrementado por los intereses que el fondo obtuvo de los préstamos concedidos a los demás trabajadores socios.

Debemos tener presente, sin embargo, que este tipo de asociaciones son ajenas e independientes del ahorro en sí y de los llamados "fondos de ahorro", que constituyen mas bien prestaciones adicionales al salario y que derivan normalmente de una obligación patronal pactada en los contratos colectivos de trabajo.

Las cajas de ahorro tienen, sin duda, un origen que podemos identificar como netamente laboral, pero dado el desarrollo económico y la función que desempeñan, poco a poco, han ocupado un espacio en la vida económica que ha llevado a que la legislación mercantil las clasifique como una de las organizaciones auxiliares de crédito, siempre y cuando cumplan determinados requisitos.

Así, la exposición de motivos del Decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo II Bis del Título Segundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno, explica de manera detallada el porqué se incorporan este tipo de instituciones a la legislación especial, atendiendo a la función social y económica que desempeñan hoy en día, en los siguientes términos:

***"...La estrategia fundamental de la actual
"administración es la modernización de la vida
"nacional y el cambio estructural, que persigue
"entre otros los siguientes objetivos: la
"recuperación del crecimiento económico con
"estabilidad de precios y el mejoramiento
"productivo de los niveles de vida. - - - Para la
"consecución de estos propósitos, la
"modernización financiera ha sido una herramienta
"de gran relevancia, identificándose en su
"aplicación dos vertientes; primero, la liberación de
"los mercados financieros y el segundo, el
"desarrollo institucional del sistema, a través de las
"reformas al marco jurídico que define su estructura
"y operación. - - - En el sistema financiero, se han
"registrado cambios significativos en un período
"breve. Sin embargo, el proceso de modernización
"propuesto por el actual régimen ante la nación aún
"no concluye; parte importante del mismo se
"encuentra en marcha, destacando la***



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
ERA S.A.

"desincorporación bancaria, la formación de grupos
"financieros, así como el establecimiento de
"mecanismos para promover el ahorro popular. - - -
"A fines del siglo pasado y principios de éste,
"surgen en nuestro país las cajas de ahorro, con el
"propósito de ayudar a las clases económicamente
"desprotegidas. En la década de los cincuentas
"aparecen con características similares a las que
"actualmente operan. - - - El proceso de integración
"de estas sociedades se consolidó en el año de
"1974 con la constitución de mecanismos de
"respaldo institucional y operativo en que se
"agrupan un importante número de cajas populares.
"- - - En este contexto, las cajas de ahorro dejan de
"ser manifestaciones aisladas y de escasa
"trascendencia, para convertirse en entes
"organizados que han empezado a desarrollar una
"función social y a ocupar un espacio económico no
"cubierto actualmente por otras instituciones. - - - El
"papel de las cajas de ahorro empieza a rebasar los
"objetivos originalmente definidos por sus
"organizadores, para convertirse en potenciales
"promotores del desarrollo regional y local en
"algunas zonas del país. - - - La nueva fisonomía
"que con esta legislación se pretende conferir a las
"cajas de ahorro, revitalizarán su papel y
"funcionamiento en la estructura económica y
"social de nuestro país. Este hecho implica que
"importantes segmentos de la población serán

*"incorporados, no sólo a los servicios financieros
"que proporcionan, sino también al progreso
"económico general que se derive. - - - El
"reconocimiento jurídico, económico y social de las
"cajas de ahorro como intermediarios financieros
"con características singulares, es parte del
"proceso modernizador comprometido, que
"responde a la nueva realidad que exige los
"cambios adecuados y necesarios. Al incorporarse
"formalmente las cajas de ahorro a la vida
"económica se espera no sólo acrecentar el espacio
"económico nacional integrando zonas que se han
"mantenido al margen de los servicios financieros,
"sino que además, se propiciará el abatimiento del
"agio. - - - La promoción de estas sociedades
"permitirá aumentar la profundización del sistema
"financiero, contribuyendo a financiar el desarrollo
"con recursos internos al aprovechar la capacidad
"de ahorro de un amplio segmento de la población
"que constituye un ahorro caracterizado por su
"permanencia. Asimismo, con estas sociedades se
"fomenta y difunde en la población la cultura del
"ahorro. - - - Al subsanar este tipo de
"inconvenientes, las cajas de ahorro se convertirán
"en sociedades atractivas de mayor interés para la
"población, ofrecerán mayor seguridad y posibilidad
"de desarrollo. - - - En síntesis, el reconocimiento e
"incorporación plena de las sociedades de ahorro y
"préstamo a la vida financiera de nuestro sistema*



ORTE DE
NACION
UERDOS DE
SALA

**"económico se sustenta en lo siguiente: - - - La
"modernización financiera que se lleva a cabo es
"integral, por lo que es necesario incluir a todos sus
"agentes logrando una mayor competitividad entre
"ellos. - - - La modernización y la apertura financiera
"exigen mayor racionalidad económica. - - - Los
"grandes retos de nuestro tiempo son de mayor
"crecimiento económico y mejores niveles de vida
"para la población, sobre todo para quienes menos
"tienen. - - - Las sociedades de ahorro y préstamo
"serán el canal adecuado para aglutinar recursos
"dispersos de pequeños ahorradores e
"incorporarlos productivamente. La finalidad de
"esta propuesta es la de fomentar la actividad de
"estas sociedades, para lo cual será necesario
"darles un tratamiento fiscal conveniente que
"propicie su desarrollo y permita institucionalizar
"esta intermediación, además de que se trata de
"entes con fines no lucrativos. - - - Por lo expuesto,
"se requiere crear un marco jurídico que regule a las
"cajas de ahorro, garantizando su sano y eficiente
"funcionamiento, con la flexibilidad suficiente para
"el desarrollo de sus actividades ajustándose a las
"actuales condiciones económicas y financieras del
"país. Bajo esta consideración se ha juzgado
"conveniente proponer a esa honorable
"representación, la introducción de reformas y
"adiciones al régimen legal de las organizaciones de
"la Ley General de Organizaciones y Actividades**

*"Auxiliares del Crédito. - - - En virtud de las
"operaciones practicadas por las cajas de ahorro,
"se considera conveniente dotarlas de una
"personalidad jurídica. Por su naturaleza se
"propone incorporarlas como organización auxiliar
"del crédito, reguladas en la Ley General de
"Organizaciones y Actividades Auxiliares del
"Crédito. - - - Al igual que algunas otras
"organizaciones auxiliares del crédito, se requerirá
"de la autorización de la Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público, para la constitución y operación
"de las sociedades de ahorro y préstamo; en la
"inteligencia de que aquéllas que estén constituidas
"deberán solicitar la propia autorización. - - - Sin
"embargo, debido a que el objeto social de las
"sociedades mencionadas en el párrafo que
"antecede no es de naturaleza lucrativa, es
"conveniente exceptuarlas de la obligación de
"acompañar a su solicitud de constituirse y operar
"como sociedad de ahorro y préstamo, el depósito
"que se requiere para las otras organizaciones
"auxiliares del crédito. De igual manera y en
"atención al fin que persiguen no es posible que se
"constituyan como sociedad anónima, como es el
"caso de las otras organizaciones. - - - Las
"sociedades de ahorro y préstamo, sustentarán su
"naturaleza en una nueva figura societaria, con
"patrimonio en el que sus socios se limitarán el
"pago de sus aportaciones; que no perseguirá fines*



CORTE DE
NACION
JUECES DE
SALA

"de lucro; su duración será por tiempo indefinido;
"establecida en territorio nacional y su
"denominación deberá ir siempre seguida de las
"palabras 'Sociedad de Ahorro y Préstamo'. - - - El
"objeto de las sociedades a regular, será la
"captación de recursos exclusivamente de sus
"socios, para la posterior colocación entre los
"mismos. - - - Por lo que toca al capital de las
"sociedades de ahorro y préstamo, éste se integrará
"por partes sociales, las cuales serán de igual valor
"y conferirán los mismos derechos, quedando
"íntegramente pagadas en el acto de ser suscritas. -
"- - En el caso de existencia de remanentes de
"operación que presenten las sociedades de ahorro
"y préstamo, una vez deducidos los gastos que
"originen las mismas, se destinarán a obras de
"beneficio social propias en colaboración con
"autoridades federales, estatales o municipales,
"organismos públicos o privados de modo que las
"mismas se orienten a la sanidad pública,
"investigación, enseñanza y cultura, servicios de
"asistencia social, todos ellos extendidos
"especialmente al ámbito regional de actuación de
"la propia sociedad. Asimismo constituir una
"reserva para su propio desarrollo, reducir intereses
"y accesorios a los socios prestatarios, o
"proporcionar un mayor rendimiento a los socios
"ahorradores. - - - A pesar de que el objeto de las
"sociedades de ahorro y préstamo, es

***"eminentemente social y sin fines de lucro, es
"pertinente considerar un régimen de prohibición, al
"cual queden sujetas, negándoseles la posibilidad
"de recibir depósitos a la vista en cuenta de
"cheques, garantizar con sus propiedades, dar en
"prenda los títulos o valores de su cartera, operar
"sobre títulos representativos de su capital, otorgar
"fianzas o cauciones, participar en el capital de otra
"sociedad de ahorro y préstamo y de cualquier
"entidad financiera, y conceder créditos distintos a
"los de su objeto social, salvo los de carácter
"laboral. - - - Resulta necesario precisar que las
"cajas de ahorro constituidas de conformidad con
"las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, no
"estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las
"sociedades de ahorro y préstamo..."***

Del texto transcrito y para los efectos del presente estudio, lo que resulta conveniente resaltar es la naturaleza de las cajas de ahorro constituidas como entidades destinadas a la ayuda de sus miembros y que, por tanto, no tienen un fin de lucro o especulación comercial. A partir de estas características y de conformidad con la intención del legislador, se limita el tipo de actividades que las cajas de ahorro pueden llevar a cabo, se establece que la captación de recursos es exclusivamente a partir de sus socios, y para la posterior colocación de dichos recursos entre éstos, previéndose un tratamiento fiscal que propicie su desarrollo y permita institucionalizar sus funciones debiéndose



tomar en cuenta que se trata de figuras societarias con fines no lucrativos.

Ahora bien, estos lineamientos se encuentran plasmados en los artículos 38-A a 38-Q de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, preceptos entre los cuales resultan relevantes aquéllos en los cuales se define a las cajas de ahorro, se determina su objeto, cómo están integradas y la forma en que deben aplicarse los remanentes de operación que se obtengan, y cuyos textos son los siguientes:



"ARTÍCULO 38-A.- Las sociedades de ahorro y préstamo, serán personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propios, de capital variable, no lucrativas, en las que la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones. Tendrán duración indefinida, con domicilio en el territorio nacional y su denominación deberá ir siempre seguida de las palabras 'Sociedad de Ahorro y Préstamo'".

"ARTÍCULO 38-B.- Las sociedades de ahorro y préstamo tendrán por objeto la captación de recursos exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando la sociedad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. La colocación de dichos recursos se hará únicamente en los propios socios

**"o en inversiones en beneficio mayoritario de los
"mismos".**

**"ARTÍCULO 38-F.- El capital social de las
"sociedades de ahorro y préstamo estará integrado
"por partes sociales, las cuales serán de igual valor
"y conferirán a sus socios los mismos derechos.
"Deberán estar íntegramente pagadas en el acto de
"ser suscritas. - - - En los estatutos sociales deberá
"precisarse la forma como se determinará el valor
"de las partes sociales".**

**"ARTÍCULO 38-G.- Las partes sociales sólo podrán
"ser adquiridas por personas físicas y por aquéllas
"que mediante reglas de carácter general determine
"la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - - -**

**"Cada socio tendrá derecho sólo a una parte social
"y cada parte social conferirá derecho a un voto. - - -
"Las adquisiciones de partes sociales en exceso de
"lo previsto en los párrafos anteriores, serán nulas
"de pleno derecho y el importe se aplicará a la
"reserva a que se refiere la fracción II del artículo
"38-I de la presente ley, debiendo proceder la
"sociedad a la correspondiente reducción del
"capital social. - - - Lo anterior sin perjuicio de las
"sanciones que conforme a ésta u otras leyes
"fueren aplicables".**



**"ARTÍCULO 38-H.- El importe del capital social
"pagado de las sociedades de ahorro y préstamo
"deberá estar invertido en los términos que
"determine la Secretaría de Hacienda y Crédito
"Público mediante reglas de carácter general".**

**"ARTÍCULO 38-I.- Los remanentes de operación que
"presenten las sociedades de ahorro y préstamo,
"una vez deducidos los gastos en que incurran en la
"realización de las propias operaciones, deberán
"destinarse en su totalidad de conformidad con lo
"siguiente: - - - I. Obras de beneficio social propias o
"en colaboración con autoridades federales,
"estatales o municipales o con organismos públicos
"o privados de modo que las mismas se orienten a
"la sanidad pública, la investigación, enseñanza y
"cultura, o a servicios de asistencia social y, que los
"beneficios que de ellas se deriven se extiendan
"especialmente al ámbito regional de actuación de
"la sociedad de ahorro y préstamo de que se trate; -
"- - II. Constituir una reserva para el desarrollo de la
"propia sociedad de ahorro y préstamo, y - - - III. La
"distribución entre los socios, con objeto de reducir
"proporcionalmente los intereses y demás
"accesorios de los créditos que les hubieren sido
"otorgados durante el ejercicio en que se hayan
"registrado los remanentes, o proporcionar un
"mayor rendimiento a los socios ahorradores. - - -
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,**



ORTE DE
I NACION
GUERDOS DE
4 - SAAA

***"oyendo la opinión del Banco de México y de la
"Comisión Nacional Bancaria, señalará mediante
"reglas de carácter general los términos y
"porcentajes en que se llevará a cabo la distribución
"de remanentes".***

***"ARTÍCULO 38-K.- La Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público expedirá las reglas de carácter
"general para la organización y funcionamiento de
"las sociedades de ahorro y préstamo, en las que se
"determinarán las operaciones que éstas podrán
"realizar. El Banco de México emitirá las
"disposiciones en que se establezcan las
"características de dichas operaciones".***

Adicionalmente, en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y dos, fueron publicadas las Reglas Generales para la Organización y Funcionamiento de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, a través de las cuales se reglamenta el funcionamiento interno y estructura orgánica de las mismas, reiterándose su naturaleza no lucrativa y la sujeción a determinados fines, aun y cuando el número de socios y los activos de que dispongan sean elevados, pues de hecho es un requisito para constituirse como tales el tener más de quinientos socios y el monto de activos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para el ejercicio de mil novecientos noventa y dos era de \$1'500,000,000.00, equivalente al millón y medio de pesos, a partir de mil



novecientos noventa y tres en que se quitaron tres ceros a la moneda.

Dichas Reglas establecen, entre otras cosas:

**"PRIMERA.- Las presentes Reglas tienen por objeto
"establecer las bases para la organización y
"funcionamiento de las sociedades de ahorro y
"préstamo.**



**"...
"TERCERA.- Las sociedades en todo momento se
"ajustarán a los principios siguientes: - - - I. Libre
"adhesión y retiro de socios; - - - II. Igualdad de
"derechos y obligaciones de sus socios; - - - III. Las
"partes sociales no darán derecho a sus socios a
"percibir dividendo o rendimiento alguno; - - - IV. No
"perseguir fines de lucro; - - - V. Mejoramiento
"social y económico de los socios, y - - - VI.-
"Promoción del desarrollo regional".**

"...

**"VIGÉSIMA.- Los remanentes de operación que
"presenten las sociedades, una vez deducidos los
"gastos en que incurran en la realización de sus
"operaciones, incluyendo en éstos las reservas
"señaladas en la Regla Décimanovena, deberán**

*"destinarse en su totalidad de conformidad con lo
"que decida la asamblea general de socios,
"ajustándose a lo siguiente: - - - I. En obras de
"beneficio social propias o en colaboración con
"autoridades federales, estatales o municipales o
"con organismos públicos o privados, de modo que
"las mismas se orienten a la sanidad pública, la
"investigación, enseñanza y orienten a la sanidad
"pública, la investigación, enseñanza y cultura, o a
"servicios de asistencia social, y que los beneficios
"que de ellas se deriven se extiendan especialmente
"a los ámbitos regionales de actuación de la
"sociedad de que se trate; - - - II. No menos del diez
"por ciento para constituir una reserva, la cual
"deberá estar invertida en los activos señalados en
"la fracción VII de la Décimasexta de estas Reglas.
"En ningún momento deberá utilizarse esta reserva
"para efectuar los pagos de las partes sociales a
"que se refiere la Regla Décimaquinta, y - - - III.
"Reducir proporcionalmente los intereses y demás
"accesorios de los créditos que les hubieren sido
"otorgados durante el ejercicio en que se hayan
"registrado los remanentes, o para proporcionar un
"mayor rendimiento a los socios ahorradores...".*

Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Segunda de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera comparte, que a la letra dice:



"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

**"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta**

"Tomo: XVI, Octubre de 2002

"Tesis: 2a. CCXXXI/2001

"Página: 466



CORTE
DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
CON LA
SEGUNDA SALA

**"CAJAS DE AHORRO. SU EVOLUCIÓN DOCTRINAL
"Y LEGISLATIVA. De acuerdo con la doctrina, las
"cajas de ahorro son asociaciones constituidas por
"trabajadores o empleados de un centro de trabajo
"que, utilizando las aportaciones económicas de
"éstos, otorgan créditos o préstamos a los propios
"trabajadores con tasas de interés reducidas. Las
"primeras instituciones de esta naturaleza datan de
"fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y
"aparecen originalmente en Alemania,
"trasladándose posteriormente a Gran Bretaña y
"Francia. La idea que subyace a su formación es la
"del ahorro, entendido como una forma de asegurar
"la tranquilidad económica futura privándose de lo
"superfluo en el presente, es decir, se denomina
"ahorro a la suma de recursos obtenidos a través
"de este mecanismo consistente en reservar una
"parte del ingreso y acumularla durante un cierto
"periodo, por lo que la participación en una caja de
"ahorro supone que el trabajador se desprenda de
"una parte de su salario y lo aporte a un fondo**

*"común que le permita obtener crédito barato, o
"bien, recibir al final de un periodo determinado el
"dinero que aportó, incrementado por los intereses
"que el fondo obtuvo de los préstamos concedidos
"a los demás trabajadores socios. Ahora bien, aun
"cuando las cajas de ahorro tienen un origen
"netamente laboral, no pasa inadvertido que en
"virtud de que en la exposición de motivos del
"decreto mediante el cual se adicionó el capítulo II
"bis del título segundo de la Ley General de
"Organizaciones y Actividades Auxiliares del
"Crédito, publicado en el Diario Oficial de la
"Federación el veintisiete de diciembre de mil
"novecientos noventa y uno, se justificó la
"incorporación de dichas instituciones a la
"legislación especial, pues en atención a la
"finalidad social y económica que desempeñan en
"la actualidad, son constituidas como entidades
"destinadas a la ayuda de sus miembros y, por
"tanto, no tienen un fin de lucro o especulación
"comercial, de manera que el tipo de actividades
"desarrolladas por aquéllas se limitó, al establecer
"que la captación de recursos es exclusivamente a
"partir de sus socios y para su posterior colocación
"entre éstos. Posteriormente, en el Diario Oficial de
"la Federación del quince de julio de mil
"novecientos noventa y dos, fueron publicadas las
"Reglas Generales para la Organización y
"Funcionamiento de las Sociedades de Ahorro y*



"Préstamo, a través de las cuales se reglamenta su funcionamiento interno y estructura orgánica, con lo cual se reiteró su naturaleza no lucrativa y la sujeción a determinados fines.

"Amparo en revisión 1269/99. Caja de Ahorro de los Telefonistas, Sociedad de Ahorro y Préstamo. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.



ORTE DE
I NACION
QUERDOS DE
A. SALA

"Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 364; por instrucciones de la Segunda Sala se publica nuevamente, en virtud de que los datos asentados no son coincidentes con los del proyecto respectivo".

Ahora bien, el artículo tercero transitorio del Decreto reclamado, a la letra dice:

"TERCERO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquellas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la

**"vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular,
"contarán con un plazo de dos años a partir de la
"fecha que establece el primer párrafo del artículo
"PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores la
"autorización para operar como Entidad,
"sujetándose a lo dispuesto por el artículo
"OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el
"dictamen favorable de alguna Federación, con
"arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y
"Crédito Popular.**

**"Concluido el plazo anterior, las sociedades y las
"Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la
"autorización referida deberán abstenerse de
"captar recursos, en caso contrario se ubicarán en
"los supuestos de infracción previstos por la Ley
"de Ahorro y Crédito Popular y por las
"disposiciones que resulten aplicables".**

El primer párrafo del artículo Primero Transitorio y el artículo Octavo Transitorio, a los que se alude, establecen:

**"PRIMERO.- El artículo Primero del presente
"Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
"publicación en el Diario Oficial de la Federación,
"con excepción de lo señalado en los artículos
"Transitorios siguientes: ...".**



"OCTAVO.- Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10°, con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación".



Deriva de los preceptos transitorios transcritos que el Decreto reclamado no desconoce la existencia y naturaleza jurídica de las sociedades de ahorro y préstamo, ni vuelve al pasado afectando supuestos y consecuencias producidas u originadas en normas anteriores, sino que sólo regula supuestos y consecuencias surgidas con posterioridad a la iniciación de su vigencia, dándoles a tales sociedades el plazo de dos años a partir de su vigencia para solicitar su autorización para operar conforme a las nuevas reglas, so pena que de no hacerlo en dicho plazo deberán de abstenerse de captar recursos o, de lo contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción previstos en las nuevas normas.

Es claro, por tanto, que el Decreto reclamado no transgrede el principio de irretroactividad, puesto que regula supuestos y consecuencias a partir de la iniciación de su vigencia, sin volver al pasado afectando supuestos y consecuencias producidas en él.

Tampoco puede considerarse que el Decreto reclamado trastoque o altere derechos adquiridos, puesto que las sociedades de ahorro y préstamo existentes con anterioridad a su vigencia no adquirieron, por ese solo hecho, el derecho a mantener indefinidamente su actividad conforme al régimen vigente en esa época, sino que éste debe ajustarse a los lineamientos que determine el legislador mediante las modificaciones que realice al régimen jurídico para ajustarlo a las necesidades que demande la sociedad.

En efecto, en la Exposición de Motivos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular expedida mediante el Decreto reclamado, expresamente se manifestó la necesidad de adecuar el marco legal de las sociedades de ahorro y préstamo y de establecerse una regulación propia y específica para sus actividades y un control más riguroso para evitar que ahorradores se vean expuestos a riesgos y fraudes que en muchas ocasiones los han llevado a la pérdida de su patrimonio, como se advierte de la siguiente transcripción:

***"Las sociedades de ahorro y préstamo, como
"verdaderas instituciones socioeconómicas, han de
"hacer frente a las constantes transformaciones
"que, de forma progresiva, se producen en el
"contexto actual. Una legislación adecuada de
"éstas motiva que el legislador contemple la
"necesidad de ofrecer un cauce adecuado que
"analice las necesidades colectivas de los
"ciudadanos que desarrollen actividades***



CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA

"generadoras de riqueza y deriven en el empleo estable. - - - En este siglo, la tradición colectiva solidaria de raíz nacional se ha enriquecido con las aportaciones de la historia universal y particularmente con el movimiento cooperativo y el sistema cajista nacional que fincó sus raíces en nuestro país desde hace más de un siglo y ha evolucionado hasta consolidar hoy en día miles de cooperativas y organizaciones sociales que integran aproximadamente a dos millones de socios. - - - La significación social de esta economía, con sus formas de trabajo y su organización social, sobrepasa el peso específico que tienen en el Producto Nacional y en la generación de valores, además de representar el núcleo más antiguo y originario de la nación, mantienen parte de la identidad original, muestran mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos y se caracterizan por atender las necesidades básicas antes que por su rentabilidad. Legislar para ellos es tomar en consideración su origen y pensar en función de su significado social, aún antes que en su dimensión económica. - - - Las leyes generales y reglamentos que se han aprobado contemplan exclusivamente al segmento social agrario, dejando al sector cooperativo y solidario circunscrito al marco legal de las leyes particulares que se han dictado a propósito de situaciones concretas de las últimas

"décadas y, peor aún, se ha aplicado
"supletoriamente el derecho mercantil a esas
"figuras. - - - Este último aspecto, que se explica
"por la escasa discusión legislativa y de
"jurisprudencia sobre la naturaleza y la lógica del
"sector social, es opuesto al espíritu de nuestra
"Constitución, al mismo tiempo que violenta el
"derecho en su sentido más profundo de justicia
"contenido tanto en el marco normativo sustantivo
"como procesal pues engloba a un conjunto de
"individuos, organizaciones y actividades en un
"marco legal al que son ajenos, distintos y hasta
"opuestos.- - - Actualmente existen en México
"varios tipos de organismos que captan ahorro
"popular y otorgan créditos al consumo o a la
"producción de micro y pequeñas empresas. - - - El
"actual marco regulatorio que rige a las diferentes
"figuras asociativas del sector financiero social
"resulta deficiente y contradictorio, no siendo dicha
"legislación apropiada al objeto que pretende
"regular. - - - Ejemplo de lo anterior es el artículo 33
"de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el
"cual establece que la Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público emitirá las disposiciones
"administrativas bajo las cuales se regirán dichas
"entidades financieras, escuchando con tal fin la
"opinión de la Confederación Nacional respectiva y
"la del Consejo Superior del Cooperativismo; sin
"embargo, estas aún no han sido emitidas. - - - Por



CORTE DE
LA NACION
GUERDOS
LA SALL

**"su parte, las Sociedades de Ahorro y Préstamo
"(SAP's), reguladas por la Ley General de
"Organismos y Actividades Auxiliares del Crédito
"(LGOAAC) son objeto de una excesiva
"fiscalización sin que ello se traduzca en mayor
"eficiencia operativa, además la LGOAAC es
"violatoria del derecho constitucional a la libre
"asociación de los ciudadanos mexicanos al no
"permitir que las SAP's puedan federarse para la
"defensa y representación de sus intereses
"gremiales. - - - Las demás figuras jurídicas
"existentes también tienen grandes deficiencias en
"su regulación, pero sobre todo en la vigilancia que
"la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerce
"sobre ellas, además de que no presentan ningún
"tipo de seguridad para sus socios. - - - Así, nos
"encontramos con un marco legal deficiente e
"inadecuado a la naturaleza solidaria de los
"organismos financieros del sector social. - - -
"Actualmente, a las entidades que realicen ahorro y
"préstamo popular, se les aplica, en forma
"supletoria, las disposiciones de la ley bancaria y
"mercantil que no tiene nada que ver con el espíritu
"asociativo y solidario que anima a este tipo de
"organismos. - - - Atendiendo a la experiencia
"internacional está comprobado que en los países
"en los cuales existe regulación específica para las
"actividades de los organismos financieros
"solidarios, éstos han podido crecer y consolidarse**

*"como una alternativa atractiva para millones de
"personas en el mundo. - - - Las reformas
"financieras en nuestro país, han girado
"invariablemente en torno a la estructura y
"funciones del sistema bancario. Sin embargo, a
"pesar de la gran atención dedicada a la banca, la
"“Bancarización” en México es muy pobre en
"comparación con la de los otros países de
"dimensión económica similar y como
"consecuencia los servicios bancarios siguen
"siendo inaccesibles para amplios sectores de la
"población. - - - Tras la crisis financiera, la
"necesidad de establecer controles más rigurosos
"sobre la administración de riesgos y los costos de
"operación han reforzado las barreras para que los
"sectores de la población de menores ingresos y
"las micro y pequeñas empresas puedan acceder a
"los servicios proporcionados por el sistema
"bancario informal. Además, con las funciones
"bancarias, la mayor participación de bancos
"internacionales y la mayor apertura del mercado
"de servicios financieros en México, el sistema
"bancario deberá mantener decididamente su
"orientación hacia los mercados globales,
"limitando su capacidad para emprender políticas
"más agresivas para el desarrollo e integración de
"los sectores de menos ingresos y mayor riesgo. - -
"- Ante esta situación la demanda de servicios
"financieros de los sectores de menores ingresos y*



"de menor nivel educativo han propiciado el
"surgimiento de una amplia gama de
"organizaciones y sistemas que ofrecen servicios
"de ahorro y crédito frecuentemente al margen de
"las leyes que regulan a las entidades financieras y
"sin vigilancia gubernamental. La falta de un marco
"institucional que regule a estos intermediarios ha
"tenido como resultado que ahorradores y usuarios
"se vean expuestos a riesgos y fraudes que en
"muchas ocasiones los han llevado a la pérdida de
"su patrimonio. - - - Esta iniciativa de Ley fortalece
"la confianza y credibilidad en las actividades
"financieras que éstos desarrollan al establecer
"normas de organización, operación y
"funcionamiento idénticas para todos los
"organismos financieros, sin excepción alguna. - - -
"Sin duda, el fortalecimiento de las entidades de
"ahorro y préstamo depende en buena medida del
"desarrollo de experiencias de trabajo conjuntas,
"de la coordinación para la realización de acciones
"comunes y de la labor educativa que realicen los
"líderes de dichos organismos. - - - Existe la
"necesidad de crear un marco legal que como lo
"ordena nuestra Carta Magna, "establezca los
"mecanismos que faciliten la organización y
"expansión de la actividad económica del sector
"social", efectivamente con la presente iniciativa de
"ley se cumplimenta una disposición fundamental
"de la Constitución que propicia el equilibrio entre

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE
NACION
TERDOS DE
L. SALLA

*"el sector público, el privado y el social,
"estableciendo para este último disposiciones
"claras que lo estimulan y fortalecen, además de
"que se fundamenta en la tradición histórica
"solidaria del pueblo de México. - - - Para fortalecer
"a los intermediarios del ahorro popular se propone
"una nueva figura de sociedad mercantil: la
"sociedad del ahorro popular. En ésta se articulan
"la iniciativa individual para promover su
"constitución, la democratización del capital para
"dar a su gestión una amplia base social, y la
"participación de los propios ahorradores para
"hacer patente y efectiva su contribución al
"desarrollo comunitario. - - - Con la figura de la
"sociedad de ahorro popular se pretende conservar
"los principio de solidaridad y bien común
"característicos de las cooperativas de ahorro y
"crédito, comunicándolas en un contexto de mayor
"apertura e interacción social. Se trataría también
"de dar un nuevo impulso a su capacidad
"asociativa, propiciando que se agruparan en
"federaciones y en una confederación nacional. - - -
"Se autoriza a las entidades de ahorro y crédito
"popular la prestación de una gama de servicios
"similar a la que ofrece la banca moderna a su
"clientela de personas físicas y pequeñas
"empresas. Se considerará que es crucial no
"limitar legalmente la prestación de servicios, sino
"que el marco legal encausará la actividad de sus*



CORTE DE
LA NACION
ACUERDO DE
LA SALA

**"intermediarios, a satisfacer íntegramente las
"necesidades de los sectores de la población de
"menores ingresos, dispersos a lo largo y a lo
"ancho del territorio nacional, con los productos y
"servicios que adoptarán las modalidades y
"condiciones que fueran convenientes para los
"usuarios del territorio atendido por cada sociedad,
"en particular cuidando la viabilidad a largo plazo
"de los intermediarios. - - - Las sociedades de
"ahorro popular prestarán sus servicios dentro de
"un territorio definido, como una localidad o región,
"o bien en términos de un grupo de personas
"unidas por un vínculo común. La creación de
"un fondo regulador se propone como eje de
"sistema, el que retomará los sistemas de
"regulación y fomento diseñados por el Banco de
"México. - - - El fondo regulador del ahorro popular
"será la autoridad financiera especializada en la
"atención de las sociedades de ahorro popular,
"conforme a las políticas y lineamientos que
"establecerá la Secretaría de Hacienda y Crédito
"Público y el Banco de México. - - - El fondo está
"facultado para ejercer un control directo sobre la
"captación y canalización de recursos que realizará
"cada sociedad del ahorro popular y el fondo está
"facultado también mediante acciones conjuntas
"con las federaciones y las confederaciones para
"crear la infraestructura tecnológica y de servicio
"de apoyo que permita abatir los costos de**

***"transacción y desarrollar instrumentos de ahorro y
"crédito más eficientes y competitivos. - - - El fondo
"administrará el seguro de depósitos de las
"sociedades de ahorro y crédito popular conforme
"a criterios y proyectos similares a los que ahora
"existen para el ahorro bancario..."***

Deriva de lo anterior que el Decreto reclamado, que expidió la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reformó y derogó diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, fue emitido a fin de regular, entre otros servicios financieros y de intermediación, las actividades de las sociedades de ahorro y préstamo, las que constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, carecían de mecanismos legales adecuados en materia de vigilancia, manejo y operación, por lo que ante ese marco legal deficiente que tuvo como resultado que los ahorradores se vieran expuestos a asumir los riesgos consecuentes, que en ocasiones los llevaron a perder su patrimonio, lo que se tradujo en un problema no sólo económico, sino también social, como se puso de relieve en la exposición de motivos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el legislador decidió fijar las bases para regular a dichas cooperativas con el fin de fortalecer la confianza y credibilidad en las actividades que desarrollan, en un marco de legalidad que, por ende, diera certeza jurídica a los ahorradores.



Lo anterior revela que no puede considerarse, en los términos pretendidos por la parte quejosa recurrente, que las sociedades de ahorro y préstamo constituidas con anterioridad a la nueva regulación hayan adquirido el derecho a operar en los términos previstos en la legislación bajo la cual se constituyeron, pues ello impediría al legislador adecuar las leyes y las instituciones a las necesidades sociales que el devenir histórico demande. Por ello, las cajas de ahorro y préstamo que se constituyeron con anterioridad a la vigencia del decreto reclamado sólo adquirieron el derecho a funcionar de conformidad con los ordenamientos anteriores durante la vigencia de éstos, pero si a partir de la entrada en vigor del Decreto que se impugna, mediante el cual se expidió la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se erigen otros requisitos que no existían con anterioridad para su legal funcionamiento, ello no implica una violación al principio de irretroactividad, puesto que el cumplimiento de los nuevos requisitos se exige a partir de la vigencia de la ley posterior.

Por el sentido que la informa, tiene aplicación la tesis que dice:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: XI, Mayo de 2000

"Tesis: 2a. XLIII/2000

"Página: 309

**"INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA
"EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA,
"PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA
"ENTIDAD EL 14 DE DICIEMBRE DE 1998, NO ES
"RETROACTIVA. Del examen de dicha ley,
"específicamente de sus artículos 1o., 2o.,
"fracciones IV, V y XIV, 8o. y 71, tanto a la luz de la
"teoría de los componentes de la norma, como
"tomando en cuenta la teoría de los derechos
"adquiridos, se infiere que dicho ordenamiento no
"viola la garantía de irretroactividad que establece
"el artículo 14 constitucional, en virtud de que
"regula supuestos y consecuencias producidas a
"partir del inicio de su vigencia, sin afectar
"consecuencias producidas en el pasado; por lo
"tanto, las instituciones de asistencia privada que
"ya existían antes de la vigencia de dicha ley
"estuvieron reguladas por la ley anterior, pero en
"cuanto ésta quedó abrogada por el artículo
"segundo transitorio de la actual, pasaron a ser
"regidas por el nuevo ordenamiento, que no incurre
"en retroactividad en virtud de que no afecta
"supuestos y consecuencias producidas u
"originadas al amparo de las normas abrogadas, ni
"desconoce la naturaleza y existencia jurídica de
"tales instituciones, sino que sujeta a éstas, lo
"mismo que a las constituidas a partir de su**



**"vigencia a las nuevas normas, debiendo agregarse
"que aquellas instituciones que ya existían no
"adquirieron, por ese solo hecho, el derecho a
"mantener indefinidamente el mismo régimen
"vigente en la fecha en que se constituyeron, pues
"el legislador no está impedido para introducir
"nuevas normas, o bien, modificar o derogar las
"existentes, de acuerdo con las necesidades que
"demande la sociedad.**



CORTE DE
LA NACION
ACUERDOS DE
LA SALA

**"Amparo en revisión 171/2000. Industrias de Buena
"Voluntad, I.A.P. y otros. 7 de abril del año 2000.
"Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
"Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz
"Romero. Secretario: Raúl García Ramos".**

Por tal razón, resulta infundado el planteamiento de la recurrente en torno a que la Juez de Distrito no tomó en cuenta las diversas pruebas documentadas a las que alude en su primer agravio, pues del hecho que afirma estas pruebas acreditan, a saber la constitución de la sociedad quejosa con anterioridad a la vigencia del decreto reclamado, no deriva la violación al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que las sociedades de ahorro y préstamo constituidas con anterioridad no adquirieron el derecho a mantener el mismo régimen vigente en la fecha en que se constituyeron, en los términos que han quedado analizados y, por consecuencia, no se transgrede tampoco la garantía de audiencia al no constituir el Decreto que se controvierte un acto privativo de derechos

adquiridos por la quejosa, resultando inaplicables las tesis que invoca en relación a tal garantía y a las formalidades esenciales del procedimiento que la misma comprende.

En relación al artículo 16 constitucional que, se sostiene, también es transgredido por el Decreto reclamado, debe señalarse que el Pleno de ese Alto Tribunal ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el órgano constitucionalmente facultado para ello (fundamentación) y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), requisitos con los que cumple el Decreto impugnado en virtud de que fue expedido por el Congreso de la Unión, existiendo pronunciamiento firme en torno a sus facultades constitucionales para expedirlo y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, según fue analizado, ante la necesidad social de que se establecieran mecanismos legales adecuados en materia de vigilancia, manejo y operación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La jurisprudencia aludida es la que dice:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: I, Parte SCJN

"Tesis: 146

"Página: 149



**"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS
"ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por
"fundamentación y motivación de un acto
"legislativo, se debe entender la circunstancia de
"que el Congreso que expide la ley,
"constitucionalmente esté facultado para ello, ya
"que estos requisitos, en tratándose de actos
"legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa
"dentro de los límites de las atribuciones que la
"Constitución correspondiente le confiere
"(fundamentación), y cuando las leyes que emite se
"refieren a relaciones sociales que reclaman ser
"jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto
"implique que todas y cada una de las
"disposiciones que integran estos ordenamientos
"deben ser necesariamente materia de una
"motivación específica.**

"Séptima Época:

**"Amparo en revisión 6731/68. Lechera Guadalajara,
"S. A. 6 de mayo de 1975. Unanimidad de diecinueve
"votos.**

**"Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S. A.
"y coags. 24 de junio de 1975. Unanimidad de
"dieciséis votos.**

***"Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón
"Contreras, S. A. 15 de junio de 1982. Unanimidad
"de quince votos.***

***"Amparo en revisión 8993/82. Lucrecia Banda Luna.
"22 de mayo de 1984. Unanimidad de veinte votos.***

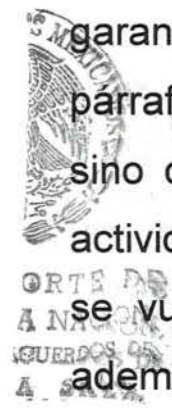
***"Amparo en revisión 5983/79. Francisco Breña
"Garduño y coags. 23 de septiembre de 1986.
"Unanimidad de diecisiete votos".***

Finalmente, resulta infundado también el argumento relativo a la transgresión al artículo 133 constitucional, pues la violación a este precepto, que establece el principio de supremacía constitucional, se hace derivar de la supuesta contravención del Decreto reclamado a los derechos individuales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carga Magna que, como se ha estudiado, no existe, ya que el Decreto impugnado no vulnera las garantías de irretroactividad, de audiencia y de legalidad, lo que lleva a la desestimación de las diversas tesis que invoca la quejosa recurrente en los agravios primero y tercero en análisis.

En el agravio identificado como segundo, la quejosa recurrente aduce, en resumen, que el Decreto reclamado, que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, contrariamente a lo determinado en la sentencia recurrida, viola el artículo 5° constitucional al privar a la



quejosa de su derecho a continuar cumpliendo en el objeto para el que fue creada sin que haya atacado derechos de tercero o haya ofendido los derechos de la sociedad, puesto que se le condiciona para seguir funcionando y desarrollando su actividad a la obtención de la autorización respectiva que ya tenía, con lo que se coarta su libertad de trabajo.



Es infundado el agravio anteriormente sintetizado, en virtud de que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que la garantía individual de trabajo que consagra el artículo 5°, primer párrafo, de la Constitución, no es absoluta, irrestricta o ilimitada, sino que se encuentra condicionada a que no se trate de una actividad ilícita, que no se afectan derechos de terceros y que no se vulneren los derechos de la sociedad, lo que se traduce, además, en la exigencia de que tal libertad, como cualquier otra, se sujete a las normas de reglamentación que determinen las condiciones en que se puede ejercer y armonizar en beneficio de la colectividad y, en el caso, la reglamentación que en torno a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se realiza en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que se expide mediante el Decreto impugnado no limita ni impide el ejercicio de la actividad de ahorro y préstamo de las sociedades cooperativas, sino que sólo las sujeta a un marco legal de vigilancia, manejo y operación en beneficio de la sociedad con el objeto de fortalecer la confianza y credibilidad en las actividades que desarrolla a fin de dar certeza jurídica a los ahorradores, como expresamente se señala en la exposición de motivos de dicha ley transcrita con anterioridad.

La jurisprudencia aludida del Pleno de este Alto Tribunal es la que ha continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: IX, Abril de 1999

"Tesis: P./J. 28/99

"Página: 260

"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE

"ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS

"FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO

"5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN

"POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

"MEXICANOS). La garantía individual de libertad

"de trabajo que consagra el artículo 5o., primer

"párrafo, de la Constitución Política de los Estados

"Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e

"ilimitada, sino que, con base en los principios

"fundamentales que deben atenderse, su ejercicio

"se condiciona a la satisfacción de los siguientes

"presupuestos: a) que no se trate de una actividad

"ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros;

"y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en

"general. En lo referente al primer supuesto, la

"garantía constitucional cobra vigencia en la

"medida que se refiera a una actividad lícita, esto



"es, que esté permitida por la ley. El segundo
"presupuesto normativo implica que la garantía no
"podrá ser exigida si la actividad a la que pretende
"dedicarse la persona conlleva a su vez la
"afectación de un derecho preferente tutelado por
"la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer
"presupuesto implica que la garantía será exigible
"siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no
"afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un
"imperativo que subyace frente al derecho de los
"gobernados en lo individual, en tanto que existe
"un valor que se pondera y asegura, que se traduce
"en la convivencia y bienestar social, lo que
"significa que se protege el interés de la sociedad
"por encima del particular y, en aras de ese interés
"mayor se limita o condiciona el individual cuando
"con éste puede afectarse aquél en una proporción
"mayor del beneficio que obtendría el gobernado.



CORTE DE
A NACIÓN
ACUERDOS DE
LA 442

"Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría
"parlamentaria de la LXVIII Legislatura del
"Congreso del Estado de Nuevo León. 25 de
"febrero de 1999. Unanimidad de diez votos.
"Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
"Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar
"Armando Cruz Quiroz.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
"el cinco de abril en curso, aprobó, con el número

"28/1999, la tesis jurisprudencial que antecede.

"México, Distrito Federal, a seis de abril de mil

"novecientos noventa y nueve."

De igual manera, resultan aplicables analógicamente al caso las tesis del Tribunal Pleno y de esta Primera Sala, que a la letra dicen:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

"Gaceta

"Tomo: XII, Septiembre de 2000

"Tesis: P. CXXXIV/2000

"Página: 16



**"COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LOS
"ARTÍCULOS 44 Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY
"REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o.
"CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE
"LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL,
"AL ESTABLECER CIERTAS CONDICIONES PARA
"SU CONSTITUCIÓN Y REGISTRO, NO VULNERAN
"LA LIBERTAD DE TRABAJO. La Suprema Corte
"de Justicia de la Nación, ha establecido en la tesis
"jurisprudencial P./J. 28/99, publicada en el
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
"Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 260,
"que la referida garantía consagrada en el artículo**



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
LA SALA

**"5o. de la Constitución Federal que prohíbe que se
"limite a las personas, en forma absoluta, el
"ejercicio de la profesión, industria, comercio o
"trabajo que les acomode, siendo lícitos no es
"irrestricta e ilimitada, sino que su ejercicio se
"condiciona a la satisfacción de ciertos
"presupuestos fundamentales, como son el que la
"actividad sea lícita, que no se ataquen derechos
"de terceros ni se ofendan derechos de la
"sociedad, además de que exige, como cualquier
"libertad, la existencia de normas de
"reglamentación que determinen las condiciones
"en que se puede ejercer y armonizar en beneficio
"de la colectividad. En estas condiciones, debe
"decirse que el hecho de que el artículo 44 de la
"Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional,
"relativo al ejercicio de las profesiones en el
"Distrito Federal establezca que todos los
"profesionistas de una misma rama podrán
"constituir en el Distrito Federal uno o varios
"colegios, sin que excedan de cinco por cada rama
"profesional, así como que el diverso artículo 45,
"fracción I, de la propia ley prevea que para
"constituir y obtener el registro de un colegio de
"profesionistas en dicha entidad, deberán tener
"cien socios como mínimo, no vulnera la garantía
"constitucional de referencia. Lo anterior es así,
"porque, por un lado, la imposición que por vía de
"ley se hace de que los profesionistas que se**

*"agrupen en los colegios sean de una misma rama
"obedece a una circunstancia que justifica y valida
"su imposición, pues dichos colegios al
"constituirse y registrarse como tales, adquieren
"ciertas funciones de interés público, lo cual
"constituye por sí mismo un bien colectivo, en
"tanto van dirigidos a salvaguardar los fines que se
"pretenden lograr con su regulación, esto es, la
"exigencia de que los profesionistas así agrupados
"sean de una misma rama se justifica en atención
"al bien colectivo que persigue, sin que dicho
"requerimiento vulnere la citada garantía, pues del
"propio artículo 5o. constitucional deriva la facultad
"de la ley para regular la constitución y
"funcionamiento de los mencionados colegios, ya
"que éstos se instituyen en función directa de la
"profesión que el propio Estado regula, al ser una
"actividad de interés general y que no se limita a
"buscar el beneficio de sus agremiados; y, por el
"otro, el requisito que impone la fracción I del
"artículo 45 del ordenamiento en mención, tampoco
"limita la libertad de trabajo, pues tal imposición se
"justifica en atención al carácter de interés público
"de las tareas a que da lugar la obtención del
"registro de los aludidos colegios de
"profesionistas.*

*"Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de
"Licenciados en Administración, A.C. 8 de mayo de*



**"2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
"Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús
"Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez
"González.**

**"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
"hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el
"número CXXXIV/2000, la tesis aislada que
"antecede; y determinó que la votación es idónea
"para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
"Federal, a cinco de septiembre de dos mil.**



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
LA SALA

**"Nota: La tesis P./J. 28/99 citada, tiene como rubro:
"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE
"ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS
"FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO
"5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN
"POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
"MEXICANOS)".**

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

**"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta**

"Tomo: XVII, Febrero de 2003

"Tesis: 1a./J. 9/2003

"Página: 162

**"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS
"50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
"PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE
"SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A
"CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA
"LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y
"RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA
"GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO
"CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER
"PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
"Este precepto garantiza la libertad de trabajo al
"establecer que a ninguna persona podrá
"impedírsele que se dedique a la profesión,
"industria, comercio o trabajo que le acomode, y la
"condiciona a la satisfacción de determinados
"presupuestos fundamentales, a saber: a) que no
"se trate de una actividad ilícita, esto es, que esté
"prohibida por la ley o que pueda significar
"transgresión al derecho positivo mexicano; b) que
"no se afecten derechos de terceros; y, c) que no
"se vulneren derechos de la sociedad. Ahora bien,
"la circunstancia de que los artículos 50 Bis y
"cuarto transitorio de la Ley de Protección y
"Defensa al Usuario de Servicios Financieros
"establezcan la obligación, a cargo de las
"instituciones financieras, de tener una unidad
"especializada, cuyo objeto es atender las
"consultas y reclamaciones que presenten los
"usuarios del servicio financiero, las cuales**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA DE
LA PAZ



**"deberán quedar constituidas dentro de los seis
"meses siguientes a la entrada en vigor del decreto
"correspondiente, no transgrede la referida
"garantía constitucional. Lo anterior es así, porque
"los mencionados artículos 50 Bis y cuarto
"transitorio tienden a regular uno de los aspectos
"de la prestación de servicios financieros, como lo
"es la solución a las consultas y reclamaciones
"que, en su caso, tales usuarios presenten ante las
"instituciones financieras, así como proteger y
"defender sus derechos e intereses, y uniformar la
"legislación y los procedimientos previstos en esta
"materia para poner a disposición de la población
"que hace uso de los mencionados servicios
"procedimientos ágiles y expeditos para resolver
"sus controversias con las instituciones
"financieras, brindándoles un marco legal que
"proporcione mayor seguridad y certidumbre en
"sus relaciones con dichas instituciones, lo que de
"manera alguna impide o limita a dichas
"instituciones el libre ejercicio de su libertad de
"trabajo y de comercio, máxime que se trata de la
"regulación de un servicio público cuya prestación
"requiere de una autorización por parte del Estado,
"lo que legitima a éste para establecer los términos
"y condiciones en que el mismo debe desarrollarse.
"Además, las señaladas unidades especializadas
"se constituyen como una vía expedita para la
"canalización de dudas o aclaraciones que**



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
LA SALA

**"eventualmente surjan entre el público usuario, y el
"tamaño que deban tener dichas unidades en
"función de sus necesidades específicas será
"decisión de las propias instituciones financieras.**

**"Amparo en revisión 84/2002. Fianzas Monterrey,
"S.A. 8 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente:
"Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba
"Rodríguez Mireles.**

**"Amparo en revisión 424/2001. Seguros Monterrey,
"S.A. 8 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente:
"José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla
"Licea Orozco.**

**"Amparo en revisión 392/2001. Seguros Inbursa,
"S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de agosto de
"2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
"Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de
"Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea
"Orozco.**

**"Amparo en revisión 222/2002. Valores Mexicanos,
"Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 2 de octubre de 2002.
"Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N.
"Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño
"Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez
"González.**





**"Amparo en revisión 74/2002. Metropolitana
"Compañía de Seguros, S.A. 8 de enero de 2003.
"Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
"García Villegas. Secretaria: María Edith Ramírez de
"Vidal.**

**"Tesis de jurisprudencia 9/2003. Aprobada por la
"Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
"siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad
"de cuatro votos de los señores Ministros:
"presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román
"Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga
"Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente:
"Juventino V. Castro y Castro.**



JORTE DE
LA NACI
ACUERPO
34 844

En atención a todo lo anteriormente expuesto y dado que los agravios planteados han resultado infundados, procede confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, debiendo destacarse que no se plantea agravio alguno contra los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida, los que, por tanto, permanecen intocados, al no surtir ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo para la suplencia de la deficiencia de la queja, pronunciamientos consistentes en: a) que el Congreso de la Unión se encuentra constitucionalmente facultado para expedir el decreto reclamado; b) que la ley impugnada no transgrede el artículo 25 constitucional; y c) en la demanda no se expresan las razones jurídicas en que se apoyó la transgresión por parte del decreto reclamado al artículo 26 constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Caja Independencia, S. C. L., Sociedad Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra los actos y las autoridades especificados en el primer resultando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.



PONENTE:

MINISTRO HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA:



CORTE DE
LA NACIÓN
ACUERDOS DE
LA SALA

MANUEL DE JESÚS SANTIZO RINCÓN.

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 914/2002, fallado el veintiuno de mayo de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos. Conste.
JJBS/me.

El Lic. Manuel de Jesús Santizo Rincón Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al concluir la sesión pública de este día se fijó en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluyó El Amparo en Revisión 914/2002

México; D.F., a 21 de mayo de 2003

- 8 JUN. 2003

Per lista de la misma fecha, se ~~aplica~~ la resolución anterior a los interesados. Conste.

Siendo las catorce horas de la fecha antes indicada, y en virtud de no haber comparecido los interesados a oír notificaciones, se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Doy fe.

[Signature]

